

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 8

LOS AÑOS PERONISTAS  
(1943-1955)

Director de tomo: Juan Carlos Torre

EDITORIAL SUDAMERICANA  
BUENOS AIRES

# I



## *Introducción a Los años peronistas*

por JUAN CARLOS TORRE



La historia política de la Argentina en el siglo XX se divide en dos: antes y después del surgimiento del peronismo. Al constituirse como fuerza política en 1945 desplazó hacia el pasado la tradicional oposición entre radicales y conservadores sobre la que habían girado las luchas políticas desde la cruzada por la libertad del sufragio. En el lugar de esa oposición se levantó otra, más cargada de contenidos de clase y tributaria de los conflictos que acompañaron la expansión de los derechos sociales y la integración política y social de vastos sectores del mundo del trabajo. En 1945 se modificaron tanto los términos como las fuentes de la principal oposición en torno de la que estaba organizada la vida política. Sin embargo, no cambió demasiado la intensidad con la que vivieron sus contrastes los bandos situados a ambos lados de esa fractura política. La hostilidad que enfrentó a radicales y conservadores en tiempos de Yrigoyen se prolongó en la hostilidad existente entre peronistas y antiperonistas durante el ascenso y la consolidación de Perón en el poder. Dos momentos clave en la formación de la Argentina moderna —la apertura del sis-

tema político y la institucionalización de las realidades propias de una sociedad industrial— estuvieron, así, atravesados por profundos desgarramientos del consenso nacional. La extrema facciosidad que caracterizó las luchas políticas tuvo un desenlace previsible: la gestación de una recurrente crisis de legitimidad que incidió negativamente sobre la perduración de cada avance hecho en la construcción de una comunidad política más democrática y más igualitaria.

Este libro se ocupa de un capítulo central de esa trayectoria del país, los años peronistas. Su comienzo se ubica en 1943, cuando se inició la secuencia histórica que llevó al encuentro de Perón y las masas obreras y a la conquista del poder político. Su terminación se produjo en 1955 por un golpe militar con un fuerte respaldo civil. Siguiendo la organización de los volúmenes de la *Nueva Historia Argentina*, los aspectos más significativos del período son abordados en diferentes capítulos. Este formato, si bien permite un tratamiento más pormenorizado, tiene el inconveniente de diluir la trama compacta de esa historia. Para subsanarlo, hemos incluido una introducción donde se ofrece un relato unificado para que sirva como guía de lectura de los capítulos de varios autores que contribuyen a este libro.

## LA REVOLUCIÓN DEL 4 DE JUNIO Y EL ASCENSO POLÍTICO DE PERÓN

En 1943 el ciclo de la restauración conservadora abierto en septiembre de 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen terminó abruptamente también por obra de un golpe militar. El 4 de junio el gobierno de Ramón Castillo fue desplazado sin ofrecer resistencia. Comenzó, entonces, un nuevo ciclo político destinado a producir transformaciones de amplio y duradero impacto en los equilibrios políticos y sociales del país. Sin embargo, la dirección de los cambios futuros fue difícil de discernir en medio de la confusión política que rodeó los primeros momentos del alzamiento militar. Un episodio revelador fue la renuncia antes de asumir de quien encabezara inicialmente el golpe, el general Arturo Rawson, y su reemplazo por el general Pedro Ramírez, ministro de Guerra del depuesto gobierno constitucional.

La Revolución de Junio fue la obra de unas Fuerzas Armadas atravesadas también ellas por los principales contrastes que dividían a la vida política nacional. El primero de ellos era la actitud frente a los bandos en pugna en la Segunda Guerra Mundial. En sintonía con la tradición del país, el presidente Castillo había optado por la política de neutralidad, pero decidió persistir en ella aun después que los Estados Unidos la abandonaran, al entrar en el conflicto bélico a fines de 1941. En estas condiciones, la neutralidad cambió de significado para ser la expresión de toda una definición ideológica, la resistencia a incorporarse a la cruzada mundial de las democracias contra el fascismo. La posición oficial se convirtió así en objeto de ásperas controversias y fuertes presiones. Sectores crecientes de la opinión pública levantaron tribunas, y desde ellas figuras políticas e intelectuales del conservadurismo liberal, del radicalismo y del socialismo hicieron escuchar su voz reclamando el alineamiento argentino con la causa de los países aliados. Por su parte, Washington respondió al recalcitrante neutralismo de Castillo suspendiendo la venta de armamentos. Estas divergencias se trasladaron dentro de la corporación militar: la política de ruptura con las potencias del Eje era compartida por altos oficiales del Ejército; no obstante, la opinión mayoritaria de los cuadros intermedios se inclinaba por el mantenimiento de la neutralidad.

Un segundo e importante contraste estaba planteado en torno del funcionamiento de las instituciones políticas. Tres años antes de la Revolución de Junio, durante la presidencia de Roberto Ortiz, había comenzado un proceso destinado a depurar las prácticas políticas de la restauración conservadora. Electo por medio del fraude y al frente de una coalición fragmentada por disputas internas, Ortiz buscó un acercamiento con los radicales. Con ese fin, a principios de 1940, anuló elecciones fraudulentas en las provincias e intervino el bastión conservador más importante, la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año los radicales triunfaron en las elecciones legislativas y consolidaron su predominio en el Congreso. El programa de regeneración democrática iniciado por Ortiz fue, empero, de corta duración. En julio de 1940, enfermo, debió delegar el gobierno en su vicepresidente, Ramón Castillo, quien pronto desandó el camino recorrido: tomó distancia de los radicales e

incluso de su propio partido y recurrió otra vez al fraude para asegurar las victorias electorales de sus contados aliados políticos. En el deslizamiento hacia una gestión cada vez más autoritaria, Castillo se replegó sobre el respaldo que le brindaban sus apoyos en las Fuerzas Armadas. En ellas la evolución de la situación política suscitaba también reacciones divergentes. Había quienes, por sus contactos con el partido radical, seguían con inquietud el retorno del fraude, pero éste era un sector minoritario; en el grueso de la oficialidad el rechazo era más amplio y se extendía hasta abarcar a los partidos y a las instituciones de la democracia liberal.

En el contexto definido por estos contrastes, a principios de 1943 Castillo tomó una decisión que sería fatal para su suerte política. En el mes de septiembre debían realizarse las elecciones convocadas para elegir a un nuevo presidente. A ellas los partidos de la oposición se aprestaron a concurrir reuniendo fuerzas en una coalición, la Unión Democrática, constituida en diciembre de 1942 a partir de la confluencia de la Unión Cívica Radical con el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Con ese mismo fin, Castillo designó como candidato de sus sectores adictos al senador conservador Robustiano Patrón Costas. Gran hacendado del norte, asociado según la opinión pública con las prácticas feudales dominantes en los ingenios azucareros y conocido partidario del fraude, el candidato de Castillo resumía los rasgos más irritativos de la restauración conservadora. A estos antecedentes, Patrón Costas agregaba otro y éste era su simpatía hacia la causa aliada y la posición de los Estados Unidos.

La decisión de Castillo tuvo por efecto aglutinar en un rechazo unánime al único sector del país que estaba en condiciones de obstaculizar sus planes: las Fuerzas Armadas. Tanto los oficiales que mantenían viva la idea de una regeneración de las prácticas políticas como los que eran partidarios del neutralismo encontraron en la postulación de Patrón Costas razones suficientes para coincidir en un golpe de Estado que, por un lado, los liberara de verse complicados con una nueva farsa electoral y, por el otro, bloqueara la rectificación de la política exterior. Las distintas facciones militares se sumaron a la Revolución de Junio creyendo cada una que de ese modo quedaba despejado el camino para sus propias aspiraciones. La confu-

sión que siguió al 4 de junio fue la consecuencia previsible de esa diversidad de objetivos. En un punto, sin embargo, el acuerdo fue total: la represión al comunismo y a las organizaciones obreras. Más allá, los rumbos del alzamiento militar permanecieron inciertos en los meses iniciales.

Quienes primero vieron frustradas las esperanzas puestas en el golpe fueron los radicales, al comprobar que el régimen militar en lugar de preparar la vuelta a comicios libres ponía límites a la actividad política. Luego fue el turno de los que abogaban por la ruptura con el Eje, que asistieron impotentes al descabezamiento del reducido grupo de oficiales aliadófilos, después de un fallido intento de aproximación a los Estados Unidos. En octubre de 1943 se produjo, finalmente, una revolución dentro de la revolución. El poder pasó a manos de un núcleo de coroneles y tenientes coroneles pertenecientes a la logia secreta autodenominada Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que se formó en los meses previos al golpe. Los miembros del GOU, la mayoría de ellos sin mando de tropa, habían cedido la iniciativa en el derrocamiento de Castillo a la jerarquía del Ejército y a los jefes de unidades; para sí se reservaron posiciones clave en el Ministerio de Guerra y en la presidencia. Desde allí maniobraron con éxito, usando sus influencias, y al cabo de cuatro meses se apoderaron de la conducción política de la Revolución de Junio. Partidarios de un neutralismo intransigente, estos jóvenes oficiales concebían el 4 de junio como la oportunidad histórica para reorganizar las bases institucionales del país a fin de ponerlo al abrigo de la corrupción de los políticos y de la amenaza comunista. Esta reorganización vendría con el establecimiento del imperio de la cruz y de la espada en el lugar hasta entonces ocupado por la Argentina liberal y laica.

Con los resortes del poder bajo control pasaron a la acción rápida y contundentemente: redoblaron las medidas represivas contra los grupos de izquierda y los sindicatos, declararon fuera de la ley a los partidos políticos, intervinieron las universidades, lanzaron una campaña moralizadora en los espectáculos y las costumbres; finalmente, implantaron la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En esta empresa contaron con la colaboración de un elenco entusiasta de nacionalistas y católicos integristas, cuya gravitación desde sus

cargos en la administración y la enseñanza fortaleció el sesgo clerical-autoritario que presentaba la Revolución de Junio hacia fines de 1943.

No sorprende que en la opinión democrática del país y del exterior el régimen militar fuese visto como un experimento fascista. Ello se tradujo bien pronto en su aislamiento político, que fue acentuándose con la evolución de la guerra a favor de la causa aliada. En un esfuerzo por salir de una situación que se tornaba insostenible pero asimismo bajo la presión de los Estados Unidos, en enero de 1944 el presidente Ramírez decidió la ruptura de relaciones con el Eje. La decisión, que sólo tenía consecuencias diplomáticas y no implicaba el enrolamiento activo del país en la guerra, provocó, no obstante, una fuerte conmoción dentro de la cúpula militar. Una primera consecuencia fue el desplazamiento de Ramírez y la designación del ministro de Guerra, general Edelmiro Farrell, en la presidencia. La segunda consecuencia habría de ser la que en breve plazo tendría el impacto mayor: el desencadenamiento de una intensa y sorda puja entre los miembros del GOU y de la que emergería convertido en el hombre fuerte de la revolución el coronel Juan Domingo Perón.

Por entonces Perón tenía 49 años. Hijo de un propietario rural mediano radicado con modesta fortuna en el sur del país, había ingresado al Ejército siendo adolescente. En 1913 se graduó en el Colegio Militar con el grado de subteniente y optó por el arma de infantería. En 1920 fue transferido a la Escuela de Suboficiales, con asiento en Campo de Mayo, donde hizo sus primeras experiencias como instructor militar. En los cinco años en los que se desempeñó en ese destino se hizo conocer, además, por su afición a los deportes, el boxeo y en particular la esgrima, en la que llegó a ser campeón del Ejército. En 1926 fue enviado a la Escuela Superior de Guerra. Fundada en 1900 con el propósito de profesionalizar el cuerpo militar, los cursos de perfeccionamiento impartidos en esta institución se convirtieron en 1915 en requisito para ascender a capitán. Con este grado Perón se recibió en 1929 y en su foja de servicios quedó registrado que tenía "condiciones excelentes para el servicio de Estado Mayor y muy buenas para aspirar al profesorado de historia militar". En los años sucesivos ocuparía ambas posiciones; antes, dos acontecimientos, uno en el plano priva-

do y otro en el profesional, marcarían su trayectoria personal. El primero fue su casamiento en 1929 con Aurelia Tizón, catorce años más joven e hija del dueño de un negocio de fotografía del barrio porteño de Belgrano. Tanto la diferencia de edad como la pertenencia de su esposa a una respetable familia de clase media se correspondían con las prácticas convencionales de los jóvenes oficiales como Perón a la hora de contraer matrimonio y formar un hogar.

El otro acontecimiento fue su participación en el movimiento militar que derrocó a Yrigoyen. Perón se vinculó inicialmente con la facción de militares nacionalistas que rodeaba al general José F. Uriburu sólo para apartarse pronto de ella desilusionado por su incompetencia para las tareas conspirativas. El golpe de Estado lo habría de encontrar, finalmente, detrás de los altos oficiales ligados al rival de Uriburu, el general



*El teniente primero Juan Domingo Perón (sexto desde la izquierda) en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, 1923.*

Agustín P. Justo, entre los que se contaban los tenientes coroneles B. Descalzo y J.M. Sarobe, profesores suyos en la Escuela de Guerra y el primero, padrino de su casamiento. Ambos sectores tenían visiones opuestas sobre los objetivos de la Revolución de 1930. El círculo de Uriburu era favorable a un régimen militar que llevara a cabo una reforma institucional para suprimir los partidos y abrir paso a un sistema corporativista; los allegados a Justo estaban, en cambio, más inclinados por una intervención militar transitoria, seguida luego por el llamado a elecciones y la vuelta al gobierno civil. Las secuelas de este conflicto se hicieron visibles con la instalación del gobierno revolucionario y alcanzaron también a Perón. Uriburu, sobre quien recaería la jefatura política de la revolución, una vez en la presidencia purgó inmediatamente la nueva administración de los elementos asociados a Justo. Entre ellos ése fue el caso de Perón: designado al día siguiente del golpe en la secretaria privada del ministro de Guerra, un mes más tarde fue separado de su cargo oficial y transferido a la Escuela de Guerra como titular de la cátedra de historia militar.

Los avatares de la política militar lo condujeron, así, al podio de profesor, en el que adquiriría una experiencia crucial para su futura carrera política. Allí tuvo ocasión de iniciarse en las rutinas de la docencia: hablar en público, expresar ideas con coherencia, interesar y mantener la atención de la audiencia. El ámbito militar, acostumbrado a las consignas claras y a las órdenes simples, era, por otra parte, poco propicio a la retórica elegante y elaborada e imponía un estilo de comunicación llano y directo. De todo ello Perón sacaría buen partido cuando, llegado al poder, hizo de la presidencia un púlpito, al servicio ahora de su propio mensaje. Durante los años en la Escuela de Guerra escribió tres libros de historia militar, que revelaron en él más a un lector atento que a un pensador original. En 1932 volvió al centro de la burocracia militar traído por el desenlace final de la Revolución de Septiembre. Luego de que la tentativa de Uriburu fracasara en medio de su soledad política dentro de la corporación militar, ese año se llevaron a cabo elecciones. En ellas resultó electo presidente al frente de una coalición conservadora el general Justo, con el auxilio de la proscripción de los candidatos radicales. Perón fue designado entonces ayudante de campo del nuevo ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez.

Desde esa posición pudo observar de cerca la exigente tarea que se asignó el general Rodríguez por encargo del presidente Justo: devolver a la disciplina profesional a un Ejército que acababa de salir de los cuarteles para hacer conocer al país sus preferencias políticas. No obstante los esfuerzos del ministro de Guerra, el cuerpo de oficiales se desenvolvió a partir de 1930 en un estado de deliberación permanente. En esas circunstancias la preservación de la unidad militar demandó una vigilancia incesante así como la manipulación de las rivalidades internas. Durante los dos primeros años del gobierno de Justo oficiales de origen radical intentaron sin éxito el camino de la rebelión desde las lejanas guarniciones de provincia adonde habían sido relegados. Luego, el epicentro de las actividades conspirativas se trasladó a los seguidores de Uriburu, los cuales sin peso suficiente en la jerarquía castrense condensaron su condena a la traición de los ideales nacionalistas en gestos simbólicos de protesta. Perón, por su parte, se mantuvo alejado de estas tentativas. “Oficial de gran porvenir” fue la calificación que mereció del general Rodríguez en su paso por el Ministerio de Guerra, donde revistó hasta 1935 mientras dictaba simultáneamente su cátedra en la Escuela de Guerra.

Su próximo destino fue la agregaduría militar en la embajada argentina en Chile, en enero de 1936. Durante los dos años en los que se prolongó su estadía, Perón aplicó sus cualidades personales —una estudiada y, sin embargo, fresca simpatía— para ganarse amigos con el fin de cumplir con la misión que le fuera asignada: obtener clandestinamente información sobre los planes expansionistas chilenos en el sur del país. Sus actividades no pasaron desapercibidas para los servicios de inteligencia locales, que infiltraron progresivamente sus contactos. No obstante, éstos se abstuvieron de intervenir a la espera de la ocasión que hiciera más efectiva dentro de la política interna de Chile la denuncia del espionaje argentino. Esa ocasión llegó en 1938, cuando Perón ya estaba de regreso en Buenos Aires. Fue su sucesor en la agregaduría militar, el mayor Eduardo Lonardi, quien terminó siendo sorprendido en plena negociación con agentes dobles chilenos y, en consecuencia, forzado a abandonar el país en medio del escándalo político. Unos diecisiete años más tarde, Perón y Lonardi volverían a cruzarse pero en circunstancias bien diferentes.

El Ejército al que se reintegró Perón después de su estadía en Chile era una institución en plena efervescencia política. Con el paso del tiempo la correlación de fuerzas de 1930 se había ido invirtiendo a medida que los elementos liberales fueron reemplazados por una nueva generación de cuadros de orientación más nacionalista. Esta evolución de la opinión militar era el fruto de varias influencias. Durante la década del treinta se produjo un fortalecimiento de los vínculos profesionales con el Ejército alemán al reanudarse la práctica anterior a la Primera Guerra Mundial de enviar oficiales a perfeccionarse en Alemania. A su vez, la embajada de ese país en Buenos Aires desarrolló fluidos e intensos contactos con el personal militar argentino. En ese marco, la admiración por la maquinaria bélica alemana se extendió para numerosos oficiales hasta el mismo régimen nazi, cuyas realizaciones eran vistas como la culminación feliz de la supresión de la política democrática y de la industrialización para el rearme nacional. Otra influencia decisiva fue la ejercida por la Iglesia, embarcada en la época en una vigorosa ofensiva contra la tradición liberal del país con el fin de dilatar su presencia pública y, más ambiciosamente, recuperar al Estado para la fe católica. En esta empresa, la conquista del Ejército fue una operación previa y necesaria, que se llevó a cabo a través de un trabajo capilar y silencioso en los cuarteles por una densa red de capellanes castrenses e intelectuales católicos. Finalmente, estaba la gravitación negativa del espectáculo poco edificante que ofrecía la vida política del país sobre las exhortaciones a la disciplina hechas por la cúpula militar. La combinación de estas influencias hizo que fuese cada vez mayor la brecha entre la concepción oficial del papel del Ejército y la que era propia de una mayoría creciente de oficiales. Para éstos, la misión del Ejército dejó de estar asociada a la defensa del territorio y la legalidad constitucional para ser concebida más bien en términos de la defensa de la nacionalidad, de una identidad argentina radicada en la tradición, la historia, los valores cristianos.

El eco de este clima de ideas en Perón quedó registrado en su correspondencia personal. En la carta que dirigiera en 1936 al general Francisco Fasola Castaño solidarizándose con su actitud, luego de que éste fuera sancionado por haber criticado públicamente al presidente Justo, escribió: "A poco de asumir

el actual Presidente de la República, muchos de nosotros nos dimos cuenta de que las intenciones y el rumbo de la primera revolución se habían torcido; ¡y pensar, mi querido general, que fuimos algunos utilizados en los designios y en los provechos de aventuras personales!” Y agregó: “Hombres esclarecidos como Ud., nos permitirán seguramente retornar a un sendero más argentino que el actual”. En otra carta de 1939, comentando la coyuntura política en el comienzo de la presidencia de Ortiz a uno de sus familiares, vaticinó: “Los conservadores, tarde o temprano, volverán a mostrar la hilacha y el pobre pueblo sufrirá otra vez las consecuencias. No habrá paz hasta que un verdadero gobierno nacional tome las riendas de la nación”. Quien así escribía, haciendo suyas las expresiones características de la retórica nacionalista, tenía por delante todavía otra e importante experiencia formadora, la de ser testigo en directo del fascismo en el poder. A ella llegó a través del infortunio: la muerte de su esposa, a la edad de 30 años, enferma de cáncer, en septiembre de 1938. Esta pérdida personal probablemente influyó para que sus superiores en el Estado Mayor aprobaran su pedido de ser destinado a una misión de estudios en el extranjero. En febrero de 1939 el ya entonces teniente coronel Perón partió a la Italia de Mussolini con la finalidad de perfeccionarse en las prácticas del ejército de montaña. •

Los dos años que habría de pasar en su nuevo destino dejarán en él impresiones profundas y duraderas sobre las que volvería una y otra vez en el futuro, cuando buscara explicar a otros y a sí mismo la evolución de sus ideas. Esas impresiones poco y nada tuvieron que ver con el arte militar de las tropas destacadas en los Alpes italianos a las que fue asignado. Éste hubo de ser más bien el observatorio desde donde pudo seguir, con la curiosidad intelectual que lo distinguía entre sus contemporáneos, los acontecimientos políticos y bélicos de Europa. Después de un primer año en la montaña logró su traslado a la agregaduría militar de la embajada argentina en Roma, un lugar más conveniente para adquirir un conocimiento de primera mano sobre el experimento corporativista de Mussolini. La misión de estudios terminó en diciembre de 1940. De regreso al país, al mes siguiente recibió la orden de trasladarse a Mendoza en calidad de profesor del centro de instrucción de

las tropas de montaña. Allí tuvo la oportunidad de frecuentar y hacer amistad con varios oficiales que más tarde lo acompañarían en su carrera política; entre ellos, el teniente coronel Domingo Mercante, luego su mano derecha, y el general Edelmiro Farrell, su apoyo importante dentro de la jerarquía militar. Había pasado poco más de un año en Mendoza cuando Farrell intervino y lo trajo consigo a sus oficinas en Buenos Aires. Desde ellas, y con el flamante grado de coronel, Perón se volcó de lleno a la actividad dominante del cuerpo de oficiales, la conspiración, y en febrero de 1943 se contó entre los miembros fundadores de la logia militar que habría de apoderarse del control político del golpe del 4 de junio.

Cuando hacia mediados de 1944 estalló el conflicto dentro del GOU la Revolución de Junio se hallaba a la defensiva. En parte por el giro adverso de la situación internacional. El avance triunfal de las potencias del Eje se había detenido y comenzaba el repliegue bajo el asedio de los ejércitos aliados. En parte también por su propia orfandad de ideas y apoyos. Durante el año transcurrido en el gobierno, la elite revolucionaria había invertido sus energías más en la condena doctrinaria que en las políticas concretas, mostrando a la vez un desinterés manifiesto por el respaldo civil, convencida de la autosuficiencia de su cruzada regeneradora. Todo parecía indicar que se encaminaba a una frustración semejante a la del fallido intento de Uriburu en 1931. Si ese destino no se cumplió entonces ello se debió al aporte oportuno de Perón. Fue él quien supo ofrecer en esos momentos difíciles dos cosas de las que carecía la Revolución de Junio: un programa social y económico y una apertura hacia grupos estratégicos de la sociedad. Con esas cartas en la mano y un talento muy superior a la rusticidad política de sus rivales, Perón logró definir la disputa interna a su favor. En julio de 1944, acumulando los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo se convirtió en el jefe virtual de la revolución.

Con respecto a las propuestas de Perón, en mayo de 1944 fue creado por su iniciativa el Consejo Nacional de Posguerra, con la tarea de preparar un programa económico que permitiera al país sobrellevar las consecuencias del fin inminente del conflicto bélico en el mundo. En los círculos militares era una opinión difundida que la terminación de la guerra entrañaba el

riesgo de la crisis económica, una vez desaparecidas las condiciones extraordinarias que habían protegido la expansión de la industria. En su visión, el retorno de la paz estaba asociado al peligro de la recesión —como ocurriera después de la Primera Guerra Mundial— y al previsible incremento de la agitación social. Por otro lado, las lecciones de la guerra habían ilustrado a los militares acerca de la importancia de contar con una industria capaz de producir armamentos y asegurar la defensa nacional. Estas razones sirvieron de inspiración a los expertos, empresarios y sindicalistas que Perón reunió en el Consejo Nacional de Posguerra en torno de un programa industrialista sostenido por el Estado y orientado a la preservación de las fuentes de empleo.

Una segunda y trascendente iniciativa de Perón comenzó a esbozarse con su designación en octubre de 1943 al frente del Departamento Nacional de Trabajo. Desde esa repartición gubernamental, que poco después elevó a la jerarquía de Secretaría de Trabajo, se hizo cargo de otra de las preocupaciones de la elite revolucionaria, el temor al auge del comunismo en el país y, en particular, en el mundo del trabajo. Pero mientras buena parte de sus camaradas era partidaria de una política de represión, Perón se propuso desactivar esa amenaza mediante una política de concesiones a los trabajadores. Con ese fin y tomando distancia de la reacción inicial de la Revolución de Junio, puramente regresiva, buscó un acercamiento con los principales dirigentes sindicales, a excepción de los comunistas. Su iniciativa cayó sobre un movimiento obrero desarrollado en el clima hostil de la restauración conservadora y despertó la expectativa de unos cuadros sindicales que habían reclamado en vano en los años previos la protección estatal. Sin embargo, los frutos de ese acercamiento tardaron en materializarse. La posición de Perón dentro del régimen militar aún no estaba consolidada y, en consecuencia, no tenía el poder ni los recursos para hacer efectivas las promesas de un nuevo trato de la cuestión social.

Resuelta la disputa interna de la elite revolucionaria a mediados de 1944, las promesas del secretario de Trabajo se convirtieron, a partir de allí, en una rotunda e innovadora realidad: los poderes públicos irrumpieron en la vida de las empresas, imponiendo la negociación colectiva, estimulando la afiliación

## La era de la justicia social

*“Simple espectador como he sido en mi vida de soldado de la evolución de la economía nacional y de las relaciones entre patrones y trabajadores, nunca he podido avenirme a la idea tan corriente de que los problemas que esa relación origina son materia privativa sólo de las partes interesadas. A mi juicio, cualquier anormalidad surgida en el más ínfimo taller y en la más oscura oficina repercute directamente en la economía general del país y en la cultura general de sus habitantes. [...] Por tener muy firme esta convicción he lamentado la despreocupación, la indiferencia y el abandono en que los hombres de gobierno, por escrúpulos formalistas repudiados por el propio pueblo, preferían adoptar una actitud negativa o expectante ante la crisis y convulsiones ideológicas, económicas, que han sufrido cuantos elementos intervienen en la vida de relación que el trabajo engendra. El Estado manteníase alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber, sólo tomaba contacto en forma aislada, cuando el temor de ver perturbado el orden aparente de la calle le obligaba a descender de la torre de marfil, de su abstencionismo suicida. No se percataban los gobernantes de que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, resultado del olvido de los deberes de los patrones que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Los trabajadores, por su parte, al lograr el predominio de sus agrupaciones sindicales, enfrentaban a la propia autoridad del Estado, pretendiendo disputar el poder político. [...] Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la Era de la Justicia Social en la Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y obreros. De ahora en adelante las empresas podrán trazar sus previsiones con la garantía de que si las retribuciones y el trato que otorgan al personal concuerdan con las sanas reglas de la convivencia no habrán de encontrar por parte del Estado sino el reconocimiento de su esfuerzo por el engrandecimiento del país. Los obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que se establezcan habrán de ser aplicadas con el mayor celo por las autoridades. Unos y otros deberán persuadirse de que ni la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque una voluntad inquebrantable exigirá de ambos la vigencia de los derechos y obligaciones...”*

Fragmento del discurso de Perón en la asunción del cargo de secretario de Trabajo y Previsión el 2 de diciembre de 1943.

sindical, reparando viejos agravios por decreto. Sus primeros beneficiarios fueron los gremios más organizados de la época, cuyos dirigentes, en su mayoría sindicalistas y socialistas, aprovecharon las ofertas de Perón evitando, empero, comprometerse abiertamente con un régimen cuyo perfil clerical-autoritario era poco compatible con sus simpatías políticas. En la coyuntura, Perón no tuvo más remedio que convivir con esa conducta oportunista. La compañía de los dirigentes sindicales todavía le era indispensable para poder llegar con su mensaje de reparación social al conjunto de los trabajadores, acrecidos en número por las migraciones internas impulsadas por el crecimiento de la industria.

Al tiempo que puso en marcha la apertura laboral, Perón convocó a los sectores empresarios invitándolos a colaborar con ella. En un recordado discurso en la Bolsa de Comercio, en agosto de 1944, argumentó que si el Estado no intervenía para tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo, el malestar de las masas podría tornarse explosivo, poniendo en peligro el orden social y la propia subsistencia de la nación. Y, dirigiéndose a ellos directamente, sostuvo que había llegado la hora de sacrificar algo de su poder patronal para evitar la agudización de la lucha de clases. En la defensa pública de sus iniciativas, Perón colocó la acción de la Secretaría de Trabajo en línea con la doctrina social de la Iglesia; en un plano más privado, reconoció su deuda con el fascismo social europeo en su lucha contra el comunismo, de la que había sido un observador atento en su reciente estadía italiana.

No estaba, sin embargo, en el cálculo político de Perón dirigir sus propuestas hacia la creación de un sistema corporativista. De hecho, él habría de estar entre los primeros dentro de la elite revolucionaria en darse cuenta de que con el triunfo de los ejércitos aliados llegaba el fin para las alternativas no democráticas al comunismo. Con esa convicción, a comienzos de 1945, encabezó el ajuste del régimen militar a los nuevos tiempos. En el mes de marzo la Argentina aceptó el reclamo de los Estados Unidos y declaró la guerra a Alemania e Italia, con vistas a romper el aislamiento diplomático y lograr la admisión en las Naciones Unidas. En el plano interno, los admiradores locales del nacionalsocialismo perdieron sus cátedras en la enseñanza oficial, las libertades públicas fueron restableci-

das, los partidos volvieron a la legalidad y se convocó a elecciones presidenciales para 1946. Al tiempo que conducía la súbita reconversión de la Revolución de Junio, Perón se preparaba para gravitar sobre la próxima transición a la democracia. Así, mientras desmentía en público aspirar a la presidencia, inició contactos con políticos radicales y conservadores con la finalidad de poner a su servicio máquinas políticas de probada eficacia electoral. Con ese aporte, con el de los dirigentes sindicales y la colaboración que esperaba de las clases patronales, Perón fue reuniendo las piezas de la gran coalición con la que se proponía presidir, sostenido por el apoyo del Ejército y la bendición de la Iglesia, la Argentina de posguerra.

Concebido de ese modo, su proyecto político terminó en un fracaso. En primer lugar, la apertura laboral fue recibida al principio con frialdad y, luego, con hostilidad por el mundo de los negocios. En verdad, las iniciativas de la Secretaría de Trabajo no fueron al encuentro de unos empresarios atemorizados por una revolución social inminente y, por lo tanto, dispuestos a hacer sacrificios para evitarlo. Si había en sus filas preocupación y alarma, el origen estaba más bien en la propia gestión de Perón, que en nombre de la justicia social alentaba la movilización obrera y exasperaba las tensiones laborales. No era necesaria demasiada sagacidad para advertir en todo ello la tentativa de convertirse en árbitro de la páz social y de forzarlos a delegar en él todo el poder político.

En segundo lugar, la búsqueda de apoyos entre los partidos tradicionales tampoco halló en ellos suficientes voluntarios dispuestos a acompañar la empresa política de quien tenía los días contados, a juzgar por la evolución de la situación internacional. El revés más clamoroso fue la negativa de Amadeo Sabattini, el líder del ala progresista del radicalismo, al que Perón llegó a ofrecerle la vicepresidencia en una fórmula encabezada por él. Esa reticencia no era sólo el fruto de especulaciones políticas. También fue la expresión de la vigilancia moral ejercida sobre la clase política por el vasto movimiento de resistencia democrática que emergió a la luz con el aflojamiento de los controles autoritarios. Animado por estudiantes universitarios, asociaciones de profesionales y figuras de la intelectualidad, ese movimiento civil se lanzó a las calles y ocupó la prensa, impaciente por ver realizada en el país la victoria

del antifascismo sobre los campos de batalla del mundo. Desde su perspectiva, el viraje de Perón era demasiado tardío para ser tomado en serio; su gestión estaba demasiado entreverada con la trayectoria neutralista y antiliberal del régimen del que era el verdadero jefe.

Las políticas laborales de Perón no alteraron esa visión crítica de la resistencia democrática. Dichas políticas exhibían mucho en común con empresas corporativistas europeas como para facilitar la valoración de cuánto tenían de innovadoras en el contexto local. Además, que éstas encontraran una recepción favorable en los medios obreros no las hacía por ello más aceptables ya que tanto Hitler como Mussolini habían ejercido el poder con un fuerte respaldo de masas. Para quienes contemplaban la coyuntura argentina a partir de las claves provistas por el escenario internacional, del enfrentamiento de la causa de la democracia con sus enemigos de entonces, la transición desde el antifascismo al antiperonismo habría de ser un proceso casi natural e inevitable, como ha mostrado Silvia Sigal en su capítulo "Intelectuales y peronismo". Sólo quienes no adjudicaban la misma importancia al restablecimiento de las instituciones democráticas permanecieron al margen de él, como ocurrió con sectores del catolicismo y el nacionalismo. En cambio, la mayoría de los universitarios e intelectuales vio en la acción de Perón desde la Secretaría de Trabajo nada más que la faz demagógica del régimen autoritario en retirada.

Estimulada por la derrota del Tercer Reich y por la forzada reorientación del gobierno, a mediados de 1945 la movilización opositora redobló la ofensiva, decidida a imponer la rendición incondicional de Perón. En junio se sumaron a ella los empresarios. En un manifiesto público, muchos de los que poco antes habían aplaudido las medidas oficiales a favor de la industria cuestionaron las concesiones a los trabajadores y denunciaron a la Secretaría de Trabajo por alentar la agitación social en las empresas. Este desplazamiento del eje de los conflictos obligó a los sindicatos a tomar partido. En el mes de julio organizaron un gran acto en defensa de las reformas laborales. Fue sugestivo que su defensa estuviese revestida de un carácter institucional y que evitaran personalizarla en la figura de Perón. En esas horas decisivas era evidente que la preocupación de los sindicalistas estaba en ubicarse en el bando ga-

nador, por lo que seguían con indisimulada ansiedad la fuerza que adquiriría la ofensiva opositora y el paralelo retroceso del gobierno. Lo cierto es que, luego de realizado el acto, las huestes sindicales permanecieron conspicuamente ausentes de las calles de Buenos Aires.

Fue en esas circunstancias que Perón tomó una decisión estratégica: apelando a una retórica que le ganaría el fervor popular proclamó el advenimiento de la era de las masas, el fin de la dominación burguesa, y convocó a los trabajadores a movilizarse contra el complot reaccionario que amenazaba la obra de la Revolución de Junio. Cobró forma, de este modo, un nuevo intento político. Entre el proyecto original y este que emergía en medio del hostigamiento de las clases medias y altas había una diferencia capital, el sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores que, de ser una pieza importante pero complementaria en una coalición de orden y paz social, se transformaron en el principal soporte de la fórmula política de Perón.

El llamado a los trabajadores no habría de suscitar en ellos una respuesta inmediata y serviría más bien para dar la señal a la acometida final del movimiento opositor. El 19 de septiembre la Junta de Coordinación Democrática organizó una formidable demostración de fuerzas en el centro de la ciudad. Más de 240.000 personas desfilaron desafiando en la Marcha de la Constitución y la Libertad detrás de la consigna de la entrega del poder a la Suprema Corte. El gobierno reaccionó dando marcha atrás a la liberalización política: restableció el estado de sitio y ordenó a la policía ocupar las universidades, los focos más activos de la resistencia. A esa reacción siguió otra de signo completamente opuesto. El 9 de octubre la poderosa guarnición de Campo de Mayo impuso a Perón la renuncia a todos sus cargos y tres días más tarde fue enviado en prisión a la isla Martín García. En su fulminante ascenso en el régimen militar, Perón había despertado recelos y críticas entre sectores de la oficialidad y a través de esa brecha se filtró la presión incesante de las fuerzas opositoras. Los cuestionamientos incluían su desprejuiciado manejo de la política exterior, la audacia de las reformas laborales, el uso de las posiciones oficiales para promover su candidatura no obstante las promesas en contrario. Y en un lugar también destacado figuraba la censura

hacia la abierta, y por consiguiente transgresora, relación con su amante, la joven actriz Eva Duarte. El desplazamiento de Perón tuvo, sin embargo, corta duración. Una semana después, en la cual sus adversarios no supieron explotar la momentánea victoria alcanzada, recuperó el poder político pero ahora convertido en un líder de masas.

En la gestación de este desenlace concurren varios factores, según la reconstrucción hecha por Robert Potash en el capítulo "Las Fuerzas Armadas y la era de Perón". El primero fue el error táctico de la oposición democrática. En lugar de darse por satisfecha con la salida de Perón de escena continuó insistiendo en el retiro de los militares a los cuarteles y en la transferencia del poder a la Suprema Corte. Ello comportaba una verdadera humillación para los hombres de armas porque era equivalente a dar por concluida la Revolución de Junio, admitiendo su fracaso político. El nuevo responsable político del régimen, el general Eduardo Ávalos, jefe de Campo de Mayo, rechazó esa propuesta y sostuvo a Farrell en la presidencia. No obstante, se avino a la formación de un gabinete compuesto por personalidades civiles aceptables a la oposición. Las demoras y desinteligencias que rodearon la concreción de esa solución de compromiso crearon el espacio político para la intervención de un segundo factor: la movilización de los trabajadores al rescate de Perón. Al cabo de dos años, durante los cuales había distribuido beneficios y favores pero sobre todo formulado un mensaje que exaltaba los valores del trabajo y la justicia social, Perón era ya por mérito propio una figura popular.

Las noticias de su renuncia y su posterior encarcelamiento hicieron cundir inquietud y descontento en las fábricas y los barrios obreros. Contra este telón de fondo, el 16 de octubre los dirigentes sindicales se reunieron en la CGT y declararon la huelga general, luego de un largo debate y bajo el acicate del estado de agitación de los trabajadores. En la mañana del día siguiente, columnas de manifestantes comenzaron a afluir desde los suburbios a la Plaza de Mayo con la consigna de la libertad a Perón. Fue en esos momentos que entró en acción un tercer factor: la actitud del general Ávalos ante la movilización obrera. Poco antes del mediodía los oficiales de Campo de Mayo le solicitaron autorización para avanzar sobre la ciudad y empezar la represión, a la vista de la pasividad de la policía,



en gran parte solidaria con los manifestantes. Ávalos negó su consentimiento, renuente a tomar medidas que produjeran hechos de violencia, y les ordenó permanecer en Campo de Mayo mientras él se hacía cargo de la situación. Con el paso de las horas quedó claro que no tenía plan alguno, fuera de resistir el uso de la fuerza. Por la tarde debió admitir la derrota: si antes que la marcha obrera se convirtiera en avalancha no había estado dispuesto a reprimir, ahora la multitud congregada en Plaza de Mayo sólo podía ser desalojada al costo de muchas vidas. En consecuencia, inició negociaciones con oficiales cercanos a Perón, quien por entonces se encontraba en el Hospital Militar tras haber sido trasladado desde la isla Martín García. El acuerdo final fue una capitulación: Ávalos y sus aliados debían renunciar. Farrell nombraría un nuevo gabinete con hombres de confianza de Perón y éste, entre tanto, quedaría fuera del gobierno para proseguir con libertad su carrera hacia la presidencia. La confluencia de estos factores definió el desenlace de la jornada de octubre y, a través de él, la historia por venir. Con la aparición de Perón en los balcones de la Casa de Gobierno en la noche del 17, aclamado por la muchedumbre, nació el movimiento peronista a la vida política nacional.

## LA PRIMERA PRESIDENCIA

Las elecciones generales que despejarían la vía de la transición democrática fueron convocadas para el 24 de febrero de 1946. En ellas, Perón participó como candidato del oficialismo. Con el rechazo de la entrega del poder a la Suprema Corte el Ejército había ejercido una vez más, como en 1930 y en 1943, su capacidad de veto, en esta ocasión contra las pretensiones inaceptables de la oposición democrática. Luego, la inesperada y reconfortante prueba de apoyo popular a la obra social de la Revolución de Junio contribuyó a clarificar sus propias opciones. Ante la perspectiva del retorno de los políticos tradicionales, su lugar detrás de la candidatura de Perón no ofreció mayores dudas. Cualesquiera que fueran sus reticencias o prevenciones, para los cuadros de oficiales el ex vicepresidente representaba la continuidad del proyecto revolucionario y su victoria en las urnas la oportunidad para poner a sal-

vo el prestigio militar. Por otro lado, la imprudente seguridad con la que la resistencia democrática prometía duros castigos a los responsables del experimento fascista cohesionó en un reflejo defensivo a los miembros de la corporación castrense.

Razones parecidas condujeron a Perón a ser también el candidato de la Iglesia. Lanzada la confrontación electoral, las fuerzas de la oposición no ocultaron tampoco su intención de poner fin a la orientación clerical del régimen militar, agitando la bandera de la enseñanza laica. Ello forzó a salir de sus vacilaciones a la jerarquía eclesiástica, cuya simpatía inicial por la elite revolucionaria había disminuido a causa de la radicalización del discurso de Perón y su llamado a la movilización de las masas. En la busca de una salida a la transición democrática menos contaminada por el conflicto social, las máximas autoridades de la Iglesia dirigieron su atención a los partidos políticos sólo para comprobar que en sus filas prevalecía un espíritu de revancha tanto contra la Revolución de Junio como contra las conquistas que ésta garantizara al mundo católico. Fue así que en las vísperas de los comicios dieron a conocer una pastoral donde recomendaban a sus fieles, con escaso entusiasmo pero sin dar lugar a equívocos, el voto por el candidato del gobierno que había perseguido a los comunistas y establecido la enseñanza religiosa.

Frente a la proximidad de las elecciones y cerrada la opción de contar con el aporte de aparatos partidarios existentes, Perón y quienes lo apoyaban debieron organizar en breve plazo su coalición electoral. Fortalecidos por la exitosa culminación del 17 de octubre, los dirigentes sindicales tomaron la iniciativa y crearon un partido político propio, el Partido Laborista. El otro componente de la coalición fue la UCR-Junta Renovadora, una escisión del radicalismo promovida por Perón con el fin de limitar el sesgo obrerista de su candidatura y captar segmentos más amplios del electorado. Desde un principio la convivencia entre ambas agrupaciones se desarrolló con dificultades, en particular por la resistencia de los laboristas, que acusaban a los disidentes del radicalismo de ser el caballo de Troya de la vieja política dentro del nuevo movimiento popular. Perón debió extremar su poder de persuasión primero para la concertación de un pacto de unidad electoral y luego para imponer a Hortensio Quijano, un veterano dirigente radical de Corrientes, como su compañero de fórmula.

Las fuerzas de la oposición se nuclearon nuevamente bajo el estandarte de la Unión Democrática. A los miembros originales de 1942 —la UCR, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista— se agregó ahora el Partido Comunista. Los partidos aliados se comprometieron a votar la fórmula presidencial del radicalismo, integrada por José P. Tamborini y Enrique Mosca, y presentar listas separadas para los demás cargos electivos. Su programa de gobierno no fue menos novedoso ni más conservador que el sostenido por la coalición peronista. Uno y otro se dirigían a un país en el que la industrialización era un proceso ya irreversible y respondían al clima ideológico de la posguerra, con su énfasis en la intervención del Estado en la economía y la distribución más igualitaria de la riqueza. Incluso en lo concerniente a la política laboral, la Unión Democrática abogó por el perfeccionamiento de cuanto había sido hecho y no por una marcha atrás. Pero este programa de gobierno ocupó un lugar secundario en su campaña electoral. Su propio candidato a la presidencia subrayó que el

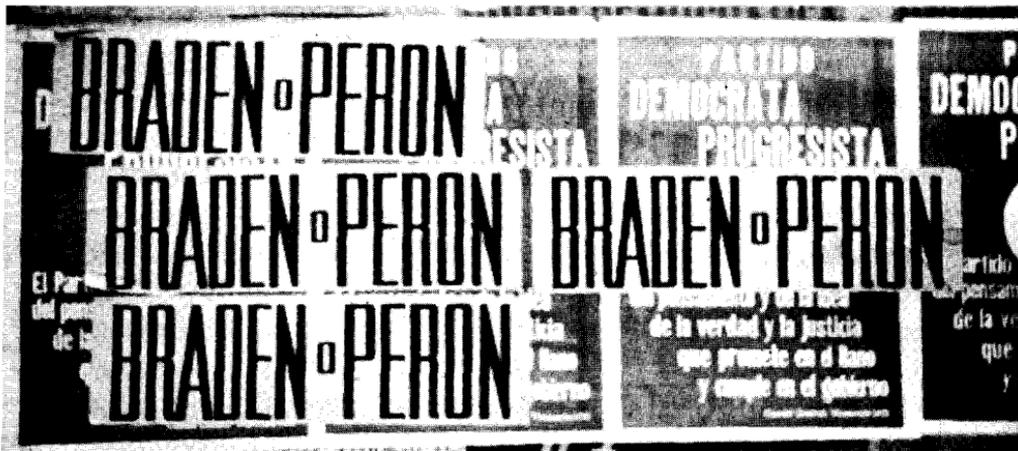


*Acto de cierre de campaña de la Unión Democrática, diciembre de 1945.*

momento de decidir el futuro social y económico del país llegaría una vez superados los peligros que se cernían sobre las libertades públicas. “Sería un desconocimiento de la realidad argentina si yo creyera que éste es el momento de explayarme sobre temas de esta índole” —se explicó Tamborini—. “El drama que nos conmueve a todos en la hora presente es la pérdida de las libertades”. Alertando sobre este peligro, corporizado en el triunfo de Perón, y levantando la consigna “Por la libertad contra el nazifascismo” los partidos opositores salieron al encuentro del electorado.

Esta perspectiva sobre lo que estaba en juego tuvo un primer efecto en la polémica que se desató en sus filas a propósito de la incorporación de los conservadores en la Unión Democrática. Al final primó el veto de los radicales, que aun en esa hora de definiciones no estuvieron dispuestos a presentarse a los comicios en compañía de los responsables del fraude de los años treinta. El veto radical provocó la división de las filas conservadoras. De un lado estuvieron los dirigentes que de todos modos decidieron apoyar a la coalición opositora; del otro aquellos que eligieron sumarse calladamente a los partidarios de Perón, movidos por su vieja rivalidad con el radicalismo. Esta adhesión de caudillos conservadores, con peso en las zonas rurales, vino a equilibrar en forma oportuna el carácter sustancialmente urbano de la organización del frente peronista.

Dos incidentes marcaron la batalla electoral, breve y ásperamente disputada. El primero fue el decreto firmado en diciembre por el presidente Farrell, invocando instrucciones expresas dejadas por el ex secretario de Trabajo, que establecía un aumento general de salarios, la extensión de las vacaciones pagas a la mayoría de los trabajadores, el aumento de las indemnizaciones por despido; además, creaba el sueldo anual complementario o aguinaldo, con la indicación de que empezaba a regir inmediatamente y debía abonarse a fines del corriente año. Con el argumento de su inconstitucionalidad, los empresarios se negaron a pagarlo. La respuesta obrera no se hizo esperar: el 8 de enero las grandes tiendas de la capital fueron ocupadas por sus empleados y su ejemplo se multiplicó en las fábricas de la periferia industrial. La situación se agravó cuando los empresarios decidieron el cierre de sus estableci-



*Propaganda electoral peronista en las elecciones de 1946.*

mientos el 13, 14 y 15 de enero. Por tres días la actividad del país estuvo paralizada y con ella la campaña proselitista. El conflicto se resolvió finalmente con el repliegue de los empresarios. Accediendo a las necesidades electorales del frente opositor, cuyo triunfo prometía acabar legalmente con el controvertido decreto, optaron por pagar el aguinaldo. La comprensible irritación de los partidos de la Unión Democrática ante el golpe electoralista del gobierno hizo que también ellos cuestionaran las medidas mismas. Esa reacción contribuyó a definir su lugar en la confrontación, diluyendo el perfil socialmente progresista de su plataforma electoral. Perón supo luego sacar las consecuencias y redefinió los términos del conflicto político. “En nuestra patria no se debate un problema entre libertad o tiranía, democracia o totalitarismo” —sostuvo en el acto de proclamación de su candidatura—, “lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre justicia social e injusticia social”.

El otro incidente fue la intervención intempestiva del ex embajador norteamericano en Buenos Aires, Spruille Braden, en la campaña electoral. Desde sus nuevas funciones en el Departamento de Estado dio a conocer a pocos días de los comicios un informe donde denunciaba las antiguas conexiones de los círculos militares con el régimen nazi. Perón aprovechó la oportuna que la ostensible injerencia de Braden ponía en sus manos para cerrar con una apelación nacionalista su con-

vocatoria final al electorado. Luego de recordar que el mismo presidente Roosevelt había sido acusado de fascista por promover una política semejante a la suya, denunció al ex embajador como el “inspirador, creador, organizador y jefe verdadero de la Unión Democrática” y concluyó, acuñando la consigna que al otro día recorrería el país: “Sepan quienes votan el 24 la fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con este acto entregan su voto al señor Braden. La disyuntiva en esta hora trascendental es ésta: ¡Braden o Perón!”.

El 24 de febrero la coalición peronista se impuso por 1.486.866 votos contra 1.288.880 de la Unión Democrática. El resultado del escrutinio fue conocido muy lentamente y hasta último momento los principales diarios, que habían apoyado al frente opositor, se obstinaron en juzgar imposible la victoria de Perón. A fines de marzo, con la difusión de los cómputos finales, la derrota de la Unión Democrática era definitiva. No obstante ser claro, el triunfo de Perón no fue abrumador. Ello hizo que, retrospectivamente, cobrara importancia el impacto que tuvo la conducción de la campaña de la Unión Democrática sobre sus posibilidades electorales. Es probable que el informe Braden y la entusiasta recepción que encontró en sus filas le haya restado apoyos potenciales. Asimismo, la exclusión de los conservadores también la afectó. Los resultados de las elecciones legislativas y de gobernadores así lo indicaron. En ellas, los distintos partidos de la oposición concurren en forma independiente y, en algunos distritos, radicales y conservadores libraron una batalla paralela, cuya virulencia eclipsó la disputa con Perón. Esto facilitó el triunfo de la coalición peronista, que obtuvo el 70% de las bancas en la Cámara de Diputados, 28 de las 30 senadurías y todas las gobernaciones de provincia con excepción de una, Corrientes.

El mapa electoral que emergió de los comicios tendió a reflejar, quizá como nunca antes, las principales fracturas de la sociedad. En las grandes concentraciones urbanas el electorado obrero se volcó en masa en favor de Perón mientras que la oposición recogió sus votos en las clases medias y altas. Los efectos de este realineamiento según criterios de clase fueron devastadores para la izquierda. Los socialistas no lograron elegir un solo legislador cuando estaban seguros de obtener la mayoría en la Capital Federal; en el extremo norte del país, en

el enclave obrero de los ingenios azucareros de Tucumán, la federación socialista local desertó en masa hacia el Partido Laborista. En las zonas rurales la penetración peronista en las clientelas populares de los partidos tradicionales también fue amplia, particularmente en las áreas más modernas del Litoral. Como mostraron los resultados de la provincia de Buenos Aires, las pérdidas mayores correspondieron al conservadurismo, donde fueron numerosos los jefes locales que emigraron con sus seguidores hacia el frente de Perón. El apoyo rural al peronismo también se reclutó en los sectores medios, atraídos por el congelamiento de los arrendamientos y la promesa de la reforma agraria. En las regiones más atrasadas y a la vez menos densas, la maquinaria política de la oposición resistió mejor y el peronismo no tuvo los votos que tendría más tarde, desde el gobierno.

El 24 de febrero la coalición oficialista resolvió exitosamente su objetivo más inmediato: asegurarse el control del poder por medios constitucionales. Restaba definir todavía el perfil del nuevo régimen político. En un aspecto crucial, éste estaba definido de antemano. La decisiva intervención de Perón en la formación de la alianza electoral le garantizaba un papel igualmente prominente en el futuro gobierno. Otra cuestión que ahora debía dilucidarse era la participación institucional que correspondía a las fuerzas reunidas en torno de su candidatura. Formada en un lapso relativamente breve y a partir de sectores de orígenes muy diversos, la coalición peronista estuvo casi al borde de la desintegración, una vez concluidas las elecciones. En el centro del conflicto estaban los dirigentes sindicales del Partido Laborista y los políticos agrupados en la UCR-Junta Renovadora. Los puntos en litigio giraron en torno de la distribución del poder en las legislaturas y en los gobiernos provinciales. Pocos días antes de asumir la presidencia, Perón ordenó la disolución de los partidos de la alianza electoral y llamó a la creación de un nuevo partido invocando la necesidad de tener un movimiento cohesionado para gobernar con eficacia y unidad.

La UCR-Junta Renovadora no resistió la orden pero la dirección laborista, que era la que insistía con más vigor en su autonomía, debatió por varios días la conducta a seguir. A mediados de junio de 1946 concluyó la breve resistencia laboris-

ta. Perón nombró a los organizadores del nuevo partido entre los legisladores recientemente electos; aunque entre ellos había algunos sindicalistas, la mayoría eran políticos de clase media de origen radical y conservador. Este rasgo habría de acentuarse con el tiempo ya que no había dentro del esquema de la flamante organización un lugar para sectores que tuvieran una base de poder independiente del partido mismo. Cuando en enero de 1947 los organizadores del nuevo partido se dirigieron a Perón para que aprobara llamarlo Partido Peronista sancionaron explícitamente otro y más decisivo rasgo de la estructura política del movimiento. El personalismo fue una consecuencia casi inevitable de la trayectoria de ese vasto conglomerado político, formado en muy corto tiempo, a partir de fuerzas muy heterogéneas y muy dependiente de quien fuera su inspirador. En estas condiciones Perón llegó a ocupar, naturalmente, la posición intransferible de conductor político y de enunciador e intérprete autorizado de las iniciativas e ideas del movimiento que se reconocía en su nombre.

No obstante, la amalgama de los apoyos políticos de Perón dentro de una misma organización siguió siendo una empresa difícil. Las elecciones internas de septiembre de 1947 en preparación del primer congreso del partido fueron escenario de fuertes enfrentamientos entre los sectores de origen laborista y los de origen político, con episodios de fraude y de abierta rebelión ante los resultados. Las autoridades centrales terminaron por intervenir todos los distritos y ése fue el estado en el que se desarrollaron la mayor parte del tiempo. Gracias a la división en ramas —masculina, femenina y sindical—, decidida recién en 1949, disminuyó el clima de beligerancia interna pero ya para entonces el partido estaba sometido a un férreo verticalismo.

Una vez doblegadas las resistencias al reagrupamiento político de sus fuerzas adictas, Perón apuntó hacia el último bastión donde se habían refugiado los sobrevivientes de la experiencia laborista: la CGT. En noviembre de 1946 Luis Gay, quien fuera el presidente del disuelto partido de los sindicatos, fue electo secretario general de la central obrera. En esta nueva plataforma, Gay pretendió seguir una línea de colaboración con el gobierno pero desde una posición de independencia y ello lo enfrentó bien pronto con Perón. La visita de una delega-

ción de sindicalistas norteamericanos, auspiciada por el propio gobierno, suministró el pretexto para resolver el conflicto. La prensa oficial montó entonces una maliciosa campaña contra Gay, acusándolo de buscar abrir una cuña entre Perón y los trabajadores en combinación con los visitantes extranjeros. En enero de 1947 Gay presentó la renuncia y el resto de la vieja guardia sindical optó por replegarse a sus organizaciones; la insistencia en la autonomía corría el riesgo de dejarlos al margen de los tangibles beneficios de la naciente Argentina peronista. Desde entonces, y conducida por figuras casi sin antecedentes, la CGT se transformó en un agente de las directivas oficiales en el movimiento obrero. La rebeldía solitaria de Cipriano Reyes, ex vicepresidente del Partido Laborista, concluyó en 1948 cuando, acusado de complotar contra Perón en una operación política tramada desde el propio gobierno, fue puesto en prisión, donde permanecería hasta 1955.

Además del Partido Peronista y la CGT, otro pilar fundamental del régimen eran las Fuerzas Armadas. La brecha abierta entre los militares y la oposición democrática en 1945 había permitido a Perón lanzarse a la conquista de la presidencia. Luego de ser elegido por el voto popular procuró presentarse como un hombre de armas con el fin de atraerse la solidaridad de la corporación militar; según Robert Potash, Perón se esforzó por colocar su relación con ésta sobre bases estrictamente institucionales. Si bien se registró una alta participación de los militares en las principales funciones de gobierno, la institución como tal no fue involucrada. Perón se fijó como objetivo la neutralidad del cuerpo de oficiales y para conseguirlo apeló ante todo a la satisfacción de sus demandas profesionales.

Varias disposiciones aumentaron sensiblemente los cargos en los más altos rangos, lo que se tradujo en una duplicación de la cantidad de generales entre 1946 y 1951. Éstos fueron los años de la expansión y modernización de las Fuerzas Armadas, con un aumento en el presupuesto militar que llevó a la Argentina al primer lugar en el ranking de los gastos en defensa de América Latina. Este intercambio político no habría sido posible sin algún grado de identificación de los militares con los principios generales del gobierno de Perón. El nacionalismo, la industrialización y el anticomunismo coincidían con creencias arraigadas en el cuerpo de oficiales. Confinadas a un pa-

pel profesional que les reportó crecientes beneficios, las Fuerzas Armadas se insertaron discretamente en el régimen peronista.

La Iglesia contribuyó asimismo al afianzamiento del nuevo régimen. La opción que hiciera en la víspera de los comicios de 1946 rindió sus frutos. El decreto que implantaba la enseñanza religiosa en las escuelas emitido en 1944 fue convertido en ley en 1947; las partidas del presupuesto con destino a las actividades de culto experimentaron un importante incremento. A esto se sumaron manifestaciones de consideración y respeto por parte de Perón que la eventual victoria de la Unión Democrática hubiera hecho menos probables: la participación oficial en las ceremonias religiosas, la convocatoria a numerosos cuadros católicos a desempeñar cargos públicos, la reiterada invocación a la Doctrina Social de la Iglesia. Estas circunstancias, destaca Lila Caimari en su capítulo "El peronismo y la Iglesia católica", condujeron a la jerarquía eclesiástica a ofrecer un fervoroso apoyo al nuevo régimen. Más tarde, la intervención gubernamental en el campo de la asistencia social y el uso político de la enseñanza debilitaron el entusiasmo de los obispos, que no hallaban tampoco fácil conciliar su respaldo a Perón con sus tradicionales vinculaciones con las clases altas. Sin embargo, durante los primeros años, se abstuvieron de hacer públicas sus reservas, esforzándose por preservar su autonomía y sus ámbitos de acción.

Con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, y la adhesión de una masa popular progresivamente encuadrada bajo una conducción centralizada, el nuevo orden tenía un futuro relativamente seguro. No obstante, Perón se propuso reforzar el régimen mediante mecanismos de control burocráticos y represivos. La primera víctima fue la Corte Suprema, que, desde un comienzo, había resistido las reformas laborales de Perón. En septiembre de 1946, el Congreso inició juicio político a sus miembros, llegando a incluir entre las acusaciones el haber reconocido como legítimos a los gobiernos de facto surgidos de los golpes militares de 1930 y 1943. Ocho meses más tarde fueron destituidos, como parte de una purga generalizada del Poder Judicial. Otro reducto de la resistencia en 1945, la Universidad, pasó por un proceso de depuración semejante tras la expulsión de miles de profesores hostiles; las

agrupaciones estudiantiles fueron declaradas fuera de la ley y una nueva legislación suprimió gran parte de las instituciones de la Reforma de 1918. En 1947 los periódicos de la oposición fueron clausurados y comenzó la compra del sistema de radiodifusión nacional por grupos económicos ligados al régimen. La expropiación de uno de los diarios más tradicionales, *La Prensa*, en 1951 y su transferencia a la CGT condujeron prácticamente al monopolio estatal de los medios de comunicación de masas. Quienes sobrevivieron con cierta independencia se ocuparon de no desafiar en forma ostensible el tono uniforme y proselitista utilizado por la Secretaría de Prensa y Difusión para celebrar las políticas de régimen peronista.

Ante esta progresiva supresión de las libertades públicas, la oposición política quedó limitada a las tribunas parlamentarias. En ellas el margen de votos que dio la victoria a la coalición peronista se transformó, por obra de la legislación electoral, en una abrumadora mayoría gubernamental. La aplicación de la Ley Sáenz Peña, que adjudicaba los dos tercios de los cargos electivos a la mayoría y el tercio restante a la primera minoría, otorgó a los peronistas no sólo el control del Poder Ejecutivo sino un amplio dominio en la Cámara baja, con 109 diputados sobre 158. Además, 13 de los 14 gobiernos provinciales fueron a los peronistas y con ellos el control del Senado. En sus cargos del Congreso, el puñado de legisladores de la oposición mantuvo el mismo espíritu belicoso de la reciente confrontación electoral frente a un gobierno que, lejos de desmentir, ratificaba con creces sus peores temores acerca de la salud de las libertades públicas. Para algunos de ellos el precio a pagar fueron el juicio por desacato, la pérdida de los fueros, la prisión; para los demás fue el silenciamiento bajo el peso de las mayorías oficialistas.

Garantizada su legitimidad en el plano interno, el nuevo gobierno buscó una reaproximación a los Estados Unidos, que surgía de la guerra como la potencia hegemónica. A pocas semanas de asumir, Perón envió al Parlamento las Actas de Chapultepec para ser ratificadas y oficializar el reingreso de la Argentina a la comunidad interamericana. En febrero y marzo de 1945, los países del continente se habían reunido en México y acordado suscribir un tratado para prevenir y reprimir la agresión contra cualquiera de ellos. El tratado era parte de las

operaciones diplomáticas que siguieron a los acuerdos de Potsdam entre las grandes potencias. Bajo la guía de los Estados Unidos, el continente americano se alineaba en la nueva división política del orden mundial.

Con el envío de las Actas de Chapultepec al Congreso, Perón procuró dar una señal de su disposición al acuerdo, aunque se permitió simultáneamente un gesto de independencia al reanudar relaciones con la Unión Soviética, interrumpidas desde 1917. A esto le siguió la deportación de un número de espías nazis y la adquisición por el Estado de empresas de propiedad alemana y japonesa. En junio de 1947 el presidente Truman anunció su satisfacción con la conducta de la Argentina, despejando la vía a la convocatoria de la conferencia de Río en septiembre de 1947. En ella, el canciller de Perón suscribió el tratado de seguridad hemisférica y el premio fue el levantamiento del embargo de armas impuesto por Estados Unidos en los años previos.

Estas iniciativas de Perón coexistieron con la proclamación de la Tercera Posición en el plano de la política internacional. En sus formulaciones habituales, ésta se condensaba en una doble demanda: el respeto por la autodeterminación de los Estados nacionales y la aspiración a un orden económico mundial más equitativo. Como ha indicado José Paradiso en su capítulo “Vicisitudes de una política exterior independiente”, la variante argentina del tercerismo en auge entre los países que emergían del proceso de descolonización de la posguerra no llegaba hasta abogar por la neutralidad en el conflicto que dividía al mundo. Perón subrayó más de una vez que el país no sería equidistante frente a la amenaza comunista. Empero, los matices de la Tercera Posición se correspondían mal con las simplificaciones propias de la Guerra Fría y fueron una fuente permanente de tensiones en sus relaciones con los Estados Unidos.

Al final de la guerra, la Argentina se encontró libre de deuda externa, con importantes reservas de divisas, una gran demanda y altos precios para sus exportaciones de alimentos y una industria en crecimiento. En este marco, la administración peronista realizó sus decisiones de política económica. Como destacan Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez en el capítulo “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, tres fueron

los ingredientes del programa implementado en 1946: la expansión del gasto público, otorgando al Estado un papel más central en la producción y en los servicios públicos a través de una política de nacionalizaciones, la distribución más equitativa del ingreso nacional y, finalmente, el paulatino montaje de un régimen de incentivos que premió las actividades orientadas al mercado interno y desestimuló la producción destinada a los mercados internacionales. Esta combinación de intervencionismo estatal, justicia social y sustitución de importaciones no fue una experiencia aislada en la América Latina de los años cuarenta. Es verdad que en la Argentina, caracterizada por un mercado de trabajo sin grandes bolsones de marginalidad social y por un movimiento sindical muy activo, el sesgo igualitarista fue más marcado que en otros países del área. Pero el papel protagónico del sector público en la acumulación de capital y el creciente énfasis en el mercado interno constituyeron, casi sin excepciones, el correlato regional al keynesianismo en boga en los países centrales de Occidente.

La economía peronista no fue, ciertamente, el resultado de una estrategia exclusivamente económica. Los apoyos sociales de Perón condicionaron sus opciones en materia económica. Entre el proyecto industrialista para la defensa nacional, asentado sobre las industrias básicas, propiciado por oficiales del Ejército durante la guerra, y la continuidad de la industrialización liviana, Perón escogió esta última alternativa, que era más congruente con una distribución progresiva del ingreso. Fue revelador que el programa siderúrgico del general Manuel Savio terminara siendo postergado y que se confiara a Miguel Miranda, un industrial de reciente fortuna, el timón de la economía, al frente del Banco Central nacionalizado y del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). La opción hecha en favor de la industria existente se completó con otra, asegurarle un sostenido nivel de actividad vía la expansión de la demanda interna. El instrumento escogido para ello fue el aumento de los salarios nominales. Convertidos, a su turno, en aumentos de salarios reales, condujeron a un rápido incremento del consumo popular que impulsó la producción industrial. En este contexto, el optimismo de la comunidad de negocios superó la aprensión que generaban la audaz política de ingresos y el poder sindical, pavimentando el camino a una

prolongada euforia bursátil y a un auge inversionista de los propios empresarios privados.

La política económica del peronismo, con sus rasgos distribucionistas y nacionalistas, fue posible gracias a la combinación de un conjunto de circunstancias favorables, que no volverían a repetirse. Las reservas de fondos externos acumulados durante la guerra —una gran proporción de los cuales era inconvertible— permitieron afrontar la nacionalización de los ferrocarriles, teléfonos, gas, marina mercante y aerolíneas comerciales. Más importante todavía, después de casi dos décadas de crisis comercial, la abrupta mejoría en los precios de las exportaciones agrícolas en 1945 —y, consecuentemente, en los términos de intercambio— facilitó el financiamiento en divisas de la economía peronista. La creación del IAPI, organismo que tuvo el virtual monopolio del comercio exterior, proveyó al gobierno de un acceso indirecto a esa fuente de recursos. Para tal fin, compraba los granos a los productores locales a un precio fijado por las autoridades y vendía en los mercados internacionales a un precio más alto. Los recursos movilizados por el IAPI, junto al ahorro forzoso proveniente de un régimen de jubilaciones con fuerte superávit en sus orígenes y una amplia batería de impuestos directos e indirectos que recayeron sobre los estratos de mayores ingresos, fueron conformando la imagen bastante veraz de un Estado rico y generoso.

Así, la excepcional evolución del mercado internacional de posguerra, los acrecidos ingresos fiscales y la masificación del ahorro institucionalizado fueron las condiciones de posibilidad de la economía peronista, plasmada en el Primer Plan Quinquenal de 1947. Este esquema, basado en el poder de compra del Estado y en los salarios altos y que, por estar orientado hacia el mercado interno, pudo desentenderse de sus inevitables costos en términos de eficiencia y competitividad, apenas duró tres años. Pero estos años fueron los que marcaron en la memoria colectiva el perfil duradero de la década peronista. Y, explicablemente, porque en ellos dio comienzo una nueva edición de la experiencia colectiva de movilidad social que el país conociera a principios del siglo.

Para la masa de los migrantes provenientes del interior la incorporación al trabajo de mercado urbano implicó de hecho una elevación social ya que ponía a su alcance ocupaciones

con salarios superiores a los que recibían en sus lugares de origen. Los trabajadores de más antigua residencia urbana, por su parte, con más recursos y contactos, pudieron subir un escalón más en la pirámide social. Ello ocurrió sea ascendiendo en sus empresas a puestos mejor remunerados, sea instalándose por su cuenta para atender la mayor demanda de servicios personales de la economía urbana. Un rasgo de los años peronistas fue el fuerte crecimiento de los asalariados de cuello y corbata impulsado por la expansión de la administración pública y las burocracias de las empresas privadas. En una medida importante, ésta fue una oportunidad de movilidad para hijos de familias obreras a los que sus padres habían conseguido mandar a la escuela. Los contingentes de las clases medias experimentaron también un incremento con el aporte de los nuevos pequeños y medianos propietarios de la industria, los servicios, el comercio, crecidos al abrigo del desarrollo del mercado interno y del consumo masivo. En el marco de una sociedad otra vez más móvil, los sectores trabajadores vieron ampliarse sus horizontes de vida más allá de sus necesidades inmediatas. Para las clases medias se abrieron nuevas fuentes de confort y de expectativas; fue significativo que a pesar de que la propaganda oficial pusiera el acento sobre la enseñanza primaria haya sido la matrícula de la enseñanza secundaria la que más aumentó durante este período.

La inserción de las fuerzas económicas en el escenario político resultante de los comicios de 1946 mostró al principio un singular contraste. Los grandes propietarios del campo, nucleados en la Sociedad Rural, escogieron pragmáticamente una política de acomodación. Perón facilitó las cosas designando a uno de ellos al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asimismo les hizo saber que las promesas de una reforma agraria hechas durante la campaña electoral serían archivadas. Distinta fue la actitud de los empresarios industriales, que recibieron al gobierno de Perón nombrando en la Unión Industrial una conducción anticolaboracionista. El costo de ese atrevimiento fue la intervención de su organización. Sin embargo, poco a poco también ellos fueron reconciliándose con la nueva situación al comprobar que la política oficial no pasaba por la confiscación de los beneficios de la favorable coyuntura económica. Las diferencias entre las grandes y las

pequeñas y medianas empresas, entre los capitales radicados en Buenos Aires y su periferia y los que tenían mayor peso en el interior —que son el eje del capítulo de James Brennan “El empresariado: la política de cohabitación y oposición”— mantuvieron, no obstante, a los industriales en un estado de pugna y fraccionamiento que se reflejó en el carácter cambiante de sus organizaciones.

Al margen de sus diferencias, unos y otros debieron convivir con los profundos cambios que se operaban en el mundo del trabajo. Con el apoyo oficial los sindicatos continuaron reclutando nuevos afiliados. En la mayoría de las actividades de la economía urbana la tasa de sindicalización se ubicó entre el 50 y el 70%. La mayor implantación de los sindicatos promovió la extensión de la cobertura de las negociaciones colectivas sobre el mercado de trabajo. Los nuevos convenios comportaron una verdadera redistribución del poder en las empresas al incorporar garantías y ventajas a los trabajadores que recortaban la autoridad patronal. En forma paralela, el Congreso dio fuerza de ley a los beneficios otorgados por decreto durante la Revolución de Junio: el aguinaldo anual, la generalización de las vacaciones pagas, la inclusión de los asalariados de la industria y el comercio en el sistema jubilatorio, las indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo. Estos mayores niveles de protección laboral cobraron vigencia efectiva al compás de la ola de movimientos reivindicativos que acompañó el ascenso del peronismo al poder. Las medidas de fuerza no estuvieron dirigidas contra el gobierno sino contra empresarios que resistían los cambios. En estos primeros años —señala Louise Doyon en su capítulo “La formación del sindicalismo peronista”— la huelga fue el instrumento mediante el cual los trabajadores buscaron replicar en el terreno de las relaciones laborales la victoria alcanzada en las urnas.

Con la consigna de la justicia social, el gobierno prosiguió ensanchando los cambios en el nivel de vida de las clases trabajadoras mediante las políticas de un incipiente Estado Benefactor: el congelamiento de los alquileres, la fijación de salarios mínimos, el establecimiento de precios máximos a los artículos de consumo popular, los créditos y los planes de vivienda, las mejoras en la oferta de salud pública, los programas de turismo social, la construcción de escuelas y colegios,

la organización del sistema de seguridad social. Junto a estas políticas de democratización del bienestar, que son examinadas por Juan C. Torre y Elisa Pastoriza en el capítulo “La democratización del bienestar”, desde el vértice del gobierno se otorgó una dignidad hasta entonces desconocida a los valores y prácticas del mundo del trabajo. Por los derechos que consagraba, por los bienes que ponía a su disposición, la justicia social condujo a una mayor integración sociopolítica de los trabajadores. Así, con el paso del tiempo, las masas que habían entrado a la arena política como los descamisados, definiéndose a partir de su exclusión, pasaron a identificarse como los trabajadores, subrayando, de este modo, el reconocimiento alcanzado en una sociedad ahora más igualitaria.

Esa identificación fue indisociable de su condición peronista. El vínculo establecido entre Perón y los trabajadores el 17 de octubre resultó ser sólido y duradero. Ello se puso de manifiesto en las pruebas por las que habría de pasar en el futuro, cuando el régimen peronista, urgido por los problemas económicos, puso un freno a las demandas de los trabajadores; también cuando, llevado por su celo autoritario, inició la supresión sistemática de las expresiones de independencia que surgían desde las filas del sindicalismo. En estas ocasiones, la oposición política a Perón aguardó esperanzada que se abriera una brecha entre él y sus apoyos obreros. Sin embargo, las expresiones de descontento, los conatos de rebelión, no avanzaron hasta poner en cuestión esa identidad política primordial y constitutiva del movimiento peronista.

La lealtad a Perón se hizo extensiva a Evita. Después de 1946, ésta emergió del segundo plano y fue ganando responsabilidades que desbordaron bien pronto el lugar pasivo tradicionalmente asignado a las esposas de los presidentes. Sus mayores responsabilidades se dieron en el marco de una división de tareas en la estructura del poder peronista. Perón se concentró en las actividades de gobierno; Evita tomó a su cargo la activación política del movimiento oficial, a cuyo servicio puso una oratoria vibrante y combativa que enfervorizaba a sus seguidores y provocaba el temor y el odio entre sus adversarios. Su intervención fue visible primero desde las oficinas del Ministerio de Trabajo, donde se instaló para recibir a las delegaciones obreras, escuchar sus demandas y prometerles hacerlas lle-

---

“¡Cuánta gente en la playa! Parecen hormiguitas. Eladio pregunta:

—Papá, ¿cómo puede venir tanta gente? ¿Nadie trabaja?

El padre le contesta:

—Sí, todos trabajamos. Pero ahora, desde que gobierna el general Perón, todos los obreros y empleados tienen derecho a sus vacaciones. Estos hoteles que ves son para que el obrero gaste menos. Aquí descansa. Luego volverá a su trabajo para producir más.

—¿Y quién atiende estos hoteles, papá?

—La Fundación Eva Perón.”

---

Libro de lectura para Primer Grado Superior *Alegría*

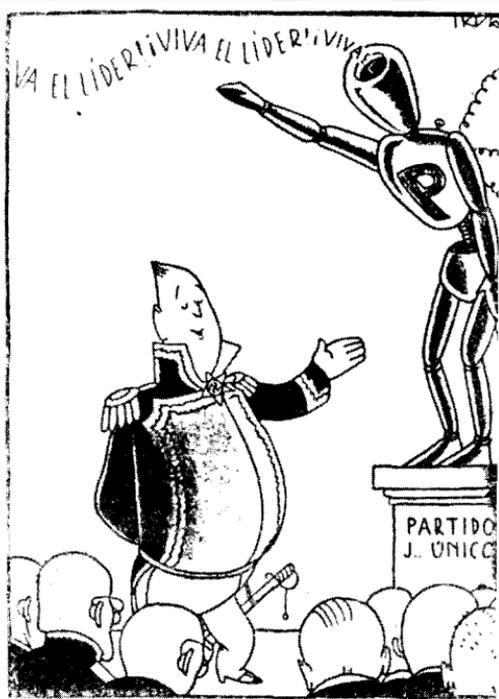
---

gar a Perón. En su papel de intermediaria entre el líder y las masas, distribuyó también premios y castigos a los dirigentes sindicales, iniciándolos en la severa disciplina del nuevo régimen. Luego se ocupó de extender la justicia social a los sectores más marginales de la población, el subproletariado urbano y los sectores populares de las provincias menos desarrolladas, para los cuales el impacto de las reformas laborales tenía una significación muy limitada. Con ese fin creó una vasta red de asistencia social a través de la Fundación Eva Perón, sostenida con donaciones no siempre voluntarias de empresas, fondos públicos y aportes regulares de los trabajadores, que tuvo una gran resonancia entre sus beneficiarios. La participación en la campaña por el derecho al voto de la mujer, sancionado en 1947, fue otra de las empresas de Evita. Marysa Navarro ha prestado especial atención a ella en su capítulo “Evita”, iluminando los matices del compromiso de Evita para con la condición femenina y la política.

La prosperidad económica, el apoyo popular y el autoritarismo contribuyeron a que el régimen se desarrollara sin tropiezos. Era previsible que buscara su consolidación y ésa fue la intención que inspiró la reforma constitucional de 1949. Una Asamblea Constituyente en la que los partidarios de Perón eran cómoda mayoría introdujo modificaciones en el viejo texto liberal de 1853. A él incorporó una larga enumeración de derechos sociales; las novedades operativas incluyeron: el voto directo para presidente y vice, suprimiendo el Colegio

Electoral, y para senadores, sin el trámite previo de las legislaturas provinciales; la ampliación del mandato de los diputados y senadores a seis años y su renovación parcial cada tres; el fortalecimiento del Ejecutivo por medio de la facultad del veto parcial. Un artículo extraído del modelo mexicano consagró la propiedad estatal sobre los recursos energéticos. En la coyuntura, la modificación políticamente más significativa fue la supresión de la cláusula que prohibía la reelección presidencial inmediata.

Una vez aprobada la reforma se inició una campaña destinada a la reelección de Perón en 1951. La central sindical proclamó a Evita para el segundo puesto de la fórmula presidencial. Esta iniciativa sacó de su discreto segundo plano a los jefes militares, quienes aconsejaron a Perón su rechazo. El presidente se inclinó ante el veto militar y Evita anunció luego que renunciaba a su candidatura. No obstante, el episodio sirvió de pretexto para una conjura militar lanzada por un pequeño gru-



mpromociones, nuevas y usadas! ¡Pago buen precio!

—Este es, señores, el modelo oficial del perfecto paronista.

*Perón visto por el famoso caricaturista Tristán, del periódico La Vanguardia.*

po de oficiales en combinación con políticos opositores. El alzamiento del 28 de septiembre de 1951, mal organizado, a des-tiempo, sin respaldo alguno, fue fácilmente sofocado. Perón reaccionó imponiendo el estado de guerra interno y con ese instrumento procedió a depurar los cuadros de oficiales y a limitar la acción de los partidos de oposición en la campaña electoral.

En la preparación de los comicios tomó otras precauciones adicionales. Siguiendo instrucciones de la presidencia, el Congreso sancionó una nueva ley electoral, que sustituía el tradicional sistema de la lista incompleta de la Ley Sáenz Peña por el de circunscripciones uninominales. Los distritos electorales del país fueron divididos en tantas circunscripciones como diputados se eligieran. En cada una de ellas se ponía en disputa una banca de diputado y el partido que obtenía el mayor número de votos se quedaba con ella. Utilizado en 1904 y luego suprimido, este mecanismo acentuaba el sesgo mayoritario del sistema electoral. La operación política se completó con la modificación arbitraria de los límites de las circunscripciones. El ejemplo más flagrante lo constituyó el rediseño de la Capital Federal con la unificación del Barrio Norte y el Centro, donde la oposición tenía mayor peso, con otros más distantes como Parque Patricios, Mataderos, Barracas, con predominio del voto obrero, para favorecer al oficialismo.

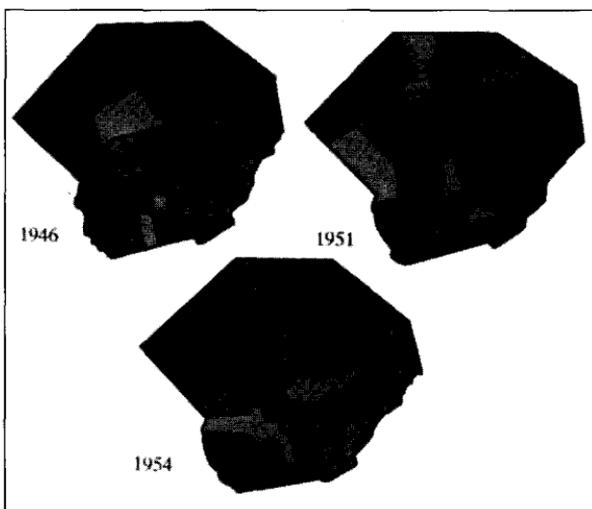
En los comicios de noviembre Perón, con la compañía de H. Quijano, por segunda vez, alcanzó una aplastante victoria: 4.745.000 votos dieron el apoyo a la fórmula oficial, mientras que los candidatos del radicalismo, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, que también tuvieron vedado el acceso a las radios, recibían 2.415.000 sufragios. Los resultados fueron más contundentes en las elecciones para diputados en las que, por la distribución establecida en la nueva legislación, los peronistas conquistaron todas las bancas a excepción de 14 que correspondieron a la oposición. El mayor impacto de esa legislación quedó bien reflejado en la ciudad de Buenos Aires. Allí, con el 42% de los votos los radicales sólo alcanzaron 5 bancas, en tanto que los peronistas con el 53% obtuvieron 23. Las elecciones dejaron claro que Perón no se daba por satisfecho con las sólidas mayorías electorales que le aseguraban la totalidad del Senado y los dos tercios de la Cámara de Diputados;

además, aspiraba a anular toda disidencia, reduciendo al mínimo la presencia opositora en el único ámbito donde podía expresarse.

Terminaba, así, la transición en la naturaleza de la competencia política que venía incubándose en los años previos. El peronismo dejó de ser un partido cuyo predominio electoral era el resultado de su mejor oferta política en la contienda con los partidos opositores por el voto de los ciudadanos.

El sistemático atrofiamiento del pluralismo político y de las libertades públicas modificó ese estado de cosas. A partir de entonces, los partidos opositores se encontraron despojados de los recursos elementales para disputar por las preferencias políticas del electorado. A su vez, las mayorías electorales que sostenían los triunfos del peronismo fueron más que antes el fruto de la manipulación de las reglas de la competencia política. En este avance arrollador hacia la hegemonía política fue sugestivo que el régimen no llegara hasta la supresión de las elecciones. De habérselo propuesto votos no le hubieran faltado y justificaciones tampoco, cuando se disponía a elevar su filosofía a la condición nacional. Sin embargo, este camino no fue explorado. Las razones seguramente tuvieron que ver con las complejas relaciones que Perón mantenía con las Fuerzas Armadas. Como el episodio del veto a la candidatura de Evita a la vicepresidencia había puesto de manifiesto, la opinión de la jerarquía militar contaba a la hora de las decisiones institucionales. En este sentido, la lealtad de la corporación castrense al jefe de Estado hubiera sido más difícil de obtener y conservar si sus títulos para gobernar no fueran periódicamente legitimados por medio de las consultas electorales, aun en las condiciones escasamente competitivas en que se llevaban a cabo.

Las elecciones de 1951 mostraron asimismo las transforma-



*Trazado de las circunscripciones electorales de 1946, 1951 y 1954.*

ciones del electorado peronista. Dichas elecciones tuvieron lugar con un padrón sustancialmente ampliado por la sanción del voto femenino. Al aporte de las mujeres se agregó la incorporación de los residentes de los nueve territorios nacionales, que por vez primera pudieron participar en las elecciones de presidente y vice. La suma de los nuevos inscriptos llevó el padrón electoral desde los 3.405.000 registrados en 1946 a los 8.634.000 de 1951. El peronismo logró captar una porción mayoritaria de los flamantes electores al tiempo que abrió profundas grietas en el electorado de los partidos tradicionales.

#### Evolución electoral 1946-1954

|   | 1946  | 1948  | 1951  | 1954  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Inscriptos en padrón electoral (en miles) | 3.405 | 3.794 | 8.634 | 8.616 |
| Votantes (en miles)                       | 2.840 | 2.816 | 7.594 | 7.451 |
| Votos peronistas (en miles)               | 1.488 | 1.728 | 4.745 | 4.659 |
| Votos peronistas (en %)                   | 52,4  | 61,3  | 62,4  | 62,5  |

Fuente: Cantón, Darío: *Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina*, Edit. del Instituto, Buenos Aires, 1968.

En los resultados finales, el voto peronista femenino superó en todos los distritos al voto peronista masculino. A la vez, en las provincias más periféricas las victorias del oficialismo se consiguieron con altos porcentajes: 81% en Chaco, 77% en Jujuy. En las zonas más centrales su predominio fue relativamente más reducido. Ése fue el caso de la Capital Federal ya indicado, donde la mayoría peronista no pasó del 53%, y de Córdoba en la que alcanzó el 55%. Este contraste entre regiones fue la contrapartida de los matices que presentaba la composición del electorado peronista. En las áreas urbanas de la Argentina moderna el peronismo emergió de los comicios como la expresión política de las clases trabajadoras; su capacidad de penetración en otros sectores sociales fue más limitada y le sumó sólo un caudal marginal respecto del fuerte y esta-



*Segunda asunción de Perón a la Presidencia de la Nación, 1952.*

ble componente de los votos de obreros y empleados. En las áreas menos desarrolladas del interior el electorado peronista se reclutó a partir de todos los estratos sociales, adquiriendo una fisonomía marcadamente policlasista. Aquí el control político tendió a estar en manos de fracciones de las clases altas locales, en línea con la experiencia del viejo conservadurismo popular. Entre tanto, en los centros más urbanos y modernos se imponía la gravitación de los trabajadores organizados dentro del formato original de Partido Laborista. La articulación de estas dos constelaciones sociopolíticas bajo un mismo liderazgo consolidó con rasgos definitivos la fortaleza de la coalición peronista.

## LA SEGUNDA PRESIDENCIA

Al votar en una proporción de dos a uno para que Perón continuara con su mandato, el electorado autorizó a éste a avanzar en la peronización de las instituciones. En 1952, el Congreso,

donde los 44 diputados de la oposición de 1946 habían quedado reducidos a 14, convirtió por medio de una ley la doctrina peronista —el justicialismo— en doctrina nacional, cuya matriz ideológica Carlos Altamirano reconstruye en el capítulo “Ideologías políticas y debate cívico”. Esta “nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular y fundamentalmente cristiana y humanista”, tenía “por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad”. La consagración del peronismo como único movimiento nacional eliminó todo vestigio de pluralismo en la vida política: las otras expresiones partidarias fueron relegadas a una existencia casi clandestina, la afiliación al partido oficial pasó a ser requisito para el desempeño de car-

---

## Las Veinte Verdades del Justicialismo

1- *La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.*

2- *El justicialismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es justicialista.*

3- *El justicialismo trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un hombre o caudillo, lo es solo de nombre.*

4- *No existe para el justicialismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.*

5- *En la Nueva Argentina el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre, y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.*

6- *Para un justicialista no puede haber nada mejor que otro justicialista.*

7- *Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un justicialista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.*

8- *En la acción política la escala de valores de todo justicialista es la siguiente: primero, la Patria, después el movimiento, y luego los hombres.*

9- *La política no es para nosotros un fin, si no sólo el medio para el bien de la Patria que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.*

10- *Los dos brazos del justicialismo son la justicia y la ayuda social.*

gos en la administración, las imágenes de Perón y Evita se multiplicaron en los libros de lectura de la escuela primaria y en los sitios más diversos del espacio público.

Esta presión unificadora venía acompañada por la retórica propia de una tentativa fundacional. En ella, el advenimiento del peronismo era el acontecimiento desencadenante de un recomienzo de la historia. A un lado quedaba el pasado ominoso, hecho de pobreza, exclusión, inseguridad; al otro se desplegaba el presente radiante de un país en paz, próspero y más justo. En el marco de esta Nueva Argentina no había un lugar reconocido para el conflicto y todo debía ser la expresión de la concordia social por fin y definitivamente alcanzada. Sus consecuencias fueron visibles en la producción cultural dirigida a públicos masivos, que estuvo dominada por un tono pasatista y superficial, especialmente en el cine. Cuando por los intersti-

---

*Con ellos damos un abrazo de justicia y amor.*

*11- El justicialismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires.*

*12- En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños.*

*13- Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social: el Justicialismo.*

*14- El justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humana.*

*15- Como doctrina política el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad.*

*16- Como doctrina económica el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social.*

*17- Como doctrina social el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social.*

*18- Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.*

*19- Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre.*

*20- En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo.*

Leídas por Perón el 17 de octubre de 1950, desde los balcones de la Casa de Gobierno.

cios del aparato de vigilancia gubernamental se colaba alguna obra que ofreciera una visión más crítica de la realidad, aunque ésta fuera una realidad distante como la evocada en 1952 por la película *Las aguas bajan turbias*, del director Hugo del Carril, un hombre del peronismo, la censura se ocupaba de silenciarla. En otro ejemplo, los historiadores de la escuela revisionista, entre los que se contaban partidarios del gobierno, no consiguieron el auspicio oficial para llevar su debate con la tradición liberal a la audiencia más amplia de la enseñanza pública. Perón vio en ellos la fuente de una división innecesaria e inconveniente y debieron continuar su prédica en los márgenes, en una existencia casi tan periférica como la de los círculos de intelectuales y literatos antiperonistas. Como destaca Silvia Sigal, más que acallar las manifestaciones disidentes en el terreno cultural, el régimen puso especial cuidado en que fueran políticamente inaudibles. Poco importaba que en los grandes actos de masas la voz airada de Perón o de Evita condenando a ese treinta por ciento del electorado tercamente opositor desmintiera la imagen oficial de una sociedad armónica. En verdad, el mismo carácter minoritario de “la contra” —tal la palabra utilizada para nombrarlo— era una prueba más de la pacífica felicidad que debía reinar en la Argentina peronista.

Esa preocupación por la paz social presidió la reorganización de las relaciones entre el Estado y los intereses sociales. Anticipado una y otra vez por Perón desde que surgiera a la vida política, el objetivo era la creación de un orden capaz de armonizar las exigencias legítimas de los sectores sociales y de neutralizar los efectos desestabilizadores de las luchas de clases. Para ello el instrumento era la “Comunidad Organizada”, en la cual los diversos grupos de interés, previamente organizados, pudiesen dirimir sus diferencias con la supervisión del Estado. Este proyecto de cuño corporativista empezó a tomar forma en 1952 a través de pasos sucesivos. A la CGT se agregó la Confederación General Económica, la nueva asociación de los empresarios, y después la Confederación General de Profesionales, la Confederación General Universitaria y la Unión de Estudiantes Secundarios.

Las motivaciones ideológicas no eran las únicas razones que impulsaron estas iniciativas, que tuvieron desigual implemen-

tación. En forma congruente con las transformaciones que introduciría en la agenda económica de su segunda presidencia, Perón también aspiraba a construir un sistema institucional que estuviera menos centrado en sus apoyos populares y que, en consecuencia, le devolviera al Estado su papel de árbitro. A estos cambios se sucedieron otros que —como muestra Robert Potash— alteraron el lugar ocupado por las Fuerzas Armadas. A partir de 1952 fueron más abiertas las tentativas de reemplazar la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas al jefe de Estado por la lealtad al liderazgo de Perón: la doctrina justicialista fue incorporada a los programas de las escuelas militares, las promociones dentro de la corporación premiaron más la fidelidad individual que la competencia profesional. La cúpula militar se inclinó ante las nuevas exigencias, pero un malestar creciente cundió particularmente en los cuerpos intermedios, generando en sus filas el terreno fértil para las actividades conspirativas. Esta reorientación de los militares respecto del peronismo era parte de un proceso más amplio.

Por sus orígenes y sus relaciones familiares, los militares compartían de cerca la ansiedad y también la intolerancia con que las clases medias más antiguas y establecidas acompañaban los cambios sociales y políticos en curso. Hasta ellas habían llegado igualmente los beneficios de la bonanza económica y no eran las destinatarias de los ataques a “la oligarquía”, el blanco predilecto de la retórica política peronista. Todo ello no bastó, sin embargo, para disminuir su rechazo a la abrumadora presencia de las masas obreras en la vida pública, a la atmósfera de forzado conformismo impuesta por los aparatos de propaganda oficial, al culto de la personalidad que coronaba la marcha del régimen. Ese rechazo hizo del antiperonismo una reacción política, pero también social y cultural, y sirvió de fermento a la gestación de un movimiento de desobediencia civil, al principio subrepticio y hecho de pequeños y simbólicos gestos de rebeldía. Al igual que en 1945, ese movimiento se desarrolló por fuera de los partidos opositores, que subsistían con dificultades en la periferia de la vida política.

Los socialistas, desprovistos súbitamente de sus apoyos obreros, mantuvieron sin cambio su condena al nuevo fenómeno político surgido del 17 de octubre. Para su núcleo dirigente, más que algo nuevo, el peronismo era la reencarnación de la

vieja hostilidad de la cultura política criolla a los ideales de la razón y la libertad. Desde su perspectiva, detrás de Perón y sus masas se recortaba inconfundible el perfil de Juan Manuel de Rosas y las suyas. Por consiguiente, no se mostraron dispuestos a escuchar a los pocos socialistas que reclamaban una postura un poco más comprensiva. Tampoco lo hicieron los jefes del Partido Comunista frente a demandas semejantes de grupos aún más reducidos de su militancia sindical. En 1951 y en 1952 en uno y otro partido se registraron intentos aislados de acercamiento al movimiento oficial que terminaron con la expulsión de sus promotores. Por su parte, los conservadores, después de las deserciones de los primeros tiempos, se alinearon detrás de una línea de oposición frontal. La crisis posterior a 1946 fue más intensa dentro del radicalismo. Una vez conocidos los resultados electorales, la corriente intransigente, la minoría en el partido, criticó a sus autoridades por haber privilegiado en exceso las consignas antifascistas, entregando a Perón el monopolio de las banderas reformistas. Este ajuste de cuentas fue seguido luego por un esfuerzo de renovación programática, que le dio al radicalismo una plataforma de corte nacionalista popular, y por una movilización exitosa por el control del partido. Los integrantes de la fórmula presidencial de 1952 fueron dos figuras de la corriente intransigente. Desde la conducción de la UCR se pronunciaron por la lucha a través de las instituciones, no obstante las restricciones puestas por el régimen, en el intento por conformar una oposición que no se confundiera con los reflejos socialmente conservadores del antiperonismo. Sus adversarios, la corriente unionista, ahora minoritaria y más en sintonía con ese estado de opinión prevalente en las clases medias y altas, optaron por la política de ruptura mediante el aliento a la resistencia clandestina y al golpe militar. Con sus fuerzas desunidas, el radicalismo quedó, empero, sumergido en el enfrentamiento faccioso que dividía al país en dos bloques antagónicos y excluyentes, impregnando de una violencia todavía sólo simbólica la convivencia entre los argentinos.

Al tiempo que el país se deslizaba hacia la polarización política y social, el 26 de julio de 1952, murió Evita, a los 33 años, víctima del cáncer. Con ella desaparecía quien mejor representaba lo que el movimiento peronista significaba para los



*Ricardo Balbín dirige la palabra en un acto en 1951.*

sectores populares, pero también cuánto tenía de aborrecible para sus adversarios. Su ausencia gravitaría sobre el desenvolvimiento futuro del régimen. Al perder la figura que mantenía vivo el activismo original y sus consignas, éste apareció más que antes exhibiendo los vicios propios de un orden autoritario seguro de sí mismo. Para entonces, su personal político había experimentado significativos cambios. Una buena parte de los hombres que rodearon a Perón en los comienzos de su gestión ya no estaba a su lado, víctima de celos políticos y de intrigas de palacio. Entre ellos, Domingo Mercante, su lugarteniente en los tiempos de la Secretaría de Trabajo y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires; Juan Atilio Bramuglia, que fuera su primer Canciller; José Miguel Figuerola, abogado de origen español con un papel destacado en la elaboración de la legislación laboral y en los trabajos de la Comisión Nacional de Posguerra y a partir de 1946 en la Secretaría Técnica de la Presidencia; Ricardo C. Guardo, el primer presidente de la Cámara de Diputados; Arturo Sampay, el redactor de la Constitución de 1949. Quienes ocupaban ahora los altos cargos buro-

cráticos eran típicamente figuras de menor brillo que debían sus posiciones al conformismo obsecuente con el que secundaban las demandas de lealtad cada vez más exigentes hechas desde el vértice del poder. Con ese comportamiento y la impunidad con la que se sabían protegidos, ellos fueron en gran medida responsables de los excesos autoritarios, los escándalos, las manifestaciones extravagantes de verticalismo que caracterizaron este tramo del régimen peronista.

A comienzos de 1953 el círculo íntimo de Perón se vio envuelto en un sonado caso de corrupción. Las sospechas convergieron sobre su secretario privado, Juan Duarte, hermano de Evita. Después que el gobierno ordenara una investigación a fondo Duarte fue encontrado muerto, lo que provocó un escándalo público no obstante la censura oficial. La CGT convocó entonces a una concentración popular para solidarizarse con Perón. El acto del 15 de abril habría de tener un dramático final al estallar dos bombas, con un saldo de siete muertos y casi un centenar de heridos. Esa noche, grupos de manifestantes incendiaron y redujeron a escombros las sedes del Jockey Club y del Partido Socialista, y provocaron daños en los locales centrales del Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical. En los días que siguieron al sanguinario atentado terrorista —obra de comandos antiperonistas integrados por jóvenes universitarios y profesionales— la policía realizó una amplia e indiscriminada detención de dirigentes y personalidades opositoras; entre los casi cuatro mil arrestados se contaron desde Alfredo Palacios hasta Victoria Ocampo. Meses más tarde, el régimen pareció advertir la necesidad de disipar las tensiones y aceptó liberar a los presos en una negociación con representantes de partidos opositores. A fines de 1953 el Congreso aprobó una ley de amnistía y con ella la mayoría de los detenidos recuperó la libertad. Estos gestos de descompresión política sirvieron para crear un clima más propicio a la búsqueda de un mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos.

Este objetivo era parte de las nuevas prioridades del programa económico, obtener capitales y contar con asistencia técnica a los efectos de impulsar la modernización industrial. La reciente elección del presidente republicano Dwight D. Eisenhower había abierto la posibilidad de colocar los vínculos entre los dos países sobre bases más pragmáticas y menos

principistas debido a su orientación favorable al mundo de los negocios. La visita a Buenos Aires en el mes de julio de 1953 de Milton Eisenhower, el hermano del mandatario norteamericano, en gira por América Latina, facilitó ese entendimiento y dio comienzo a un período de distensión luego de los años de fricciones y desencuentros. Ello trajo aparejado un relativo eclipse de la Tercera Posición y una cooperación más estrecha con los Estados Unidos en la arena internacional.

La reorientación de la agenda económica de Perón y sus corolarios en la relación con los Estados Unidos tenían como telón de fondo el fin de la bonanza del comercio exterior que lo acompañara al instalarse en el poder. En 1949 se invirtió el signo favorable de los términos de intercambio. En ese año los precios de las exportaciones del campo se colocaron un 12% por debajo de los de 1948, concluyendo así el pequeño ciclo positivo iniciado en 1945. En esas circunstancias, el gobierno hizo dos apuestas para contornear la desfavorable coyuntura. Primero, especuló con el estallido de una Tercera Guerra Mundial, que sostuviera en alza la demanda de los productos del campo argentino. Pero la guerra de Corea de 1950 quedó confinada al Extremo Oriente. La segunda apuesta fue participar en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa puesto en marcha en 1947. Tampoco aquí tuvo mejor suerte porque el gobierno norteamericano le adjudicó al país una cuota mínima en el abastecimiento de alimentos debido a la presión de intereses locales y a la subsistencia de las reservas hacia su política exterior.

En este marco estalló la crisis del sector externo, que se trasladó a la actividad industrial nacional, por la dificultad para importar maquinarias y equipos, e impulsó un crecimiento de la inflación. Frente a la emergencia, sostienen Gerchunoff y Antúnez, las autoridades oscilaron entre la continuidad y el cambio. Para una política de desarrollo basada en el liderazgo del sector público y el crédito barato para financiar la expansión del mercado interno, la alternativa de un plan de ajuste comportaba altos costos en términos de empleo y salarios. Por ello las primeras reacciones fueron parciales e inefectivas y condujeron al reemplazo de Miguel Miranda en el timón de la economía. El nuevo equipo, a cargo de Alfredo Gómez Morales, procuró ganar tiempo recortando las importa-

ciones, racionando el crédito y reduciendo los compromisos fiscales.

Una de sus consecuencias fue la sucesión de conflictos entre 1949 y 1951 en las actividades más afectadas por la disminución de subsidios públicos. Éstos no contaron ahora con la benevolencia del gobierno y terminaron con la detención de sus promotores y la intervención de los sindicatos involucrados. Tal fue lo que ocurrió con los obreros de los ingenios azucareros de Tucumán, los trabajadores de los frigoríficos, los bancarios, los gráficos, los ferroviarios. La huelga de estos últimos, a principios de 1951, provocada por las medidas de racionalización de los ferrocarriles recién nacionalizados, tuvo una gran resonancia. No solamente por sus efectos sobre el orden público sino porque se realizó a espaldas de la conducción oficial del sindicato, contó con el apoyo encubierto de grupos opositores y no cedió a los llamados de volver al trabajo hechos por Evita. La reacción gubernamental incluyó la prisión para los dirigentes rebeldes y llegó hasta la movilización militar de los trabajadores. En el contexto de este endurecimiento del clima social, el pico de la crisis habría de alcanzarse en 1951-1952, cuando el déficit del sector externo fue potenciado por las secuelas de dos sequías sucesivas. En el aciago invierno de 1952 y teniendo por marco los funerales de Evita, los argentinos debieron consumir un pan más negro, elaborado con mijo, escaseó la carne y se volvieron frecuentes los cortes de luz.

Fue entonces que el gobierno decidió una nueva estrategia económica, que involucró la revisión de sus prioridades. A partir de ese momento se privilegió la estabilidad por sobre la expansión, la agricultura por sobre la industria, la iniciativa privada y el capital extranjero por sobre el crecimiento del sector público. Con este remozado libreto se pasó a la acción tomando en cuenta, además, los condicionamientos puestos por la composición de la coalición peronista. Así, el recurso a la devaluación fue descartado porque si bien era un medio rápido para corregir la situación externa, su costo era un alza en el precio interno de los alimentos y, por lo tanto, un fuerte golpe a los ingresos de los sectores populares. Descartada la devaluación, el equilibrio externo fue buscado recortando todavía más las importaciones.

El intento por resolver el problema del déficit externo se desenvolvió en paralelo con la lucha contra la inflación. En ambos planos el mensaje oficial apuntó en la misma dirección: había llegado la hora de la austeridad luego del gran aumento del consumo de los primeros años. El llamado a gastar menos procuraba aliviar la situación externa y aquietar las presiones inflacionarias. Con este propósito, el gobierno tomó la iniciativa mediante una batería de restricciones fiscales y monetarias de cuño ortodoxo. El programa de estabilización recurrió, además, a las reservas de la colaboración de clases y promovió una tregua entre empresarios y sindicatos para neutralizar la puja distributiva y sus efectos inflacionarios. Luego de un reajuste general de precios y salarios por decreto, éstos fueron congelados por dos años, y por ese mismo lapso se suspendieron las negociaciones colectivas. Finalmente, en sintonía con su nueva estrategia, el gobierno modificó su política de incentivos con vistas al aumento de las exportaciones del agro. Después de años de ser perjudicados por la política del IAPI, los productores rurales comenzaron a recibir precios más favorables, mayores incluso que los que tenía su producción en el mercado internacional.

Juzgado por sus resultados inmediatos, el plan de ajuste lo-

---

### *La hora de la austeridad*

*“La economía justicialista establece que de la producción del país se satisface primero la necesidad de sus habitantes y solamente se vende lo que sobra; lo que sobra nada más. Claro que aquí los muchachos con esa teoría cada día comen más y consumen más y, como consecuencia, cada día sobra menos. Pero han estado sumergidos, pobrecitos, durante cincuenta años; por eso yo los he dejado que gastaran y que comieran y que derrocharan durante cinco años todo lo que quisieran; se hicieran el guardarropas que no tenían, se compraran las cositas que les gustaban y se divirtieran también; que tomaran una botella cuando tuvieran ganas. [...] pero, indudablemente, ahora empezamos a reordenar para no derrochar más...”*

Fragmento del discurso de Perón a los delegados obreros del “Comité de la Unidad Sindical Latinoamericana”, 19 de febrero de 1952.

gró capear la emergencia: la inflación se redujo en forma significativa, después de la recesión de 1951-1952 la economía volvió a crecer en 1953 y 1954, y en ese mismo período las cuentas del comercio exterior cerraron con un saldo positivo. La reanudación de las negociaciones colectivas en 1954 permitió, a su vez, si bien aplicando la presión sindical, recuperar los salarios perdidos en los años previos.

El giro estratégico de 1952 no quedó confinado a la nueva importancia que recibió la estabilidad económica. A fines de ese mismo año fue dado a conocer el Segundo Plan Quinquenal que aportó novedades de más largo plazo. Ya se hizo referencia a la decisión de devolver al sector rural parte de la rentabilidad perdida, redefiniendo la política de subsidios y precios hasta entonces sesgada en su contra. A ello se agregó la decisión de corregir la excesiva dependencia de la industria, típicamente productora de bienes de consumo, de los insumos importados. La reciente emergencia había revelado en forma contundente esa dependencia: cuando fue preciso recortar las importaciones a fin de equilibrar las cuentas externas, se advirtió que el margen para hacerlo era bien estrecho ya que estaban mayormente integradas por componentes indispensables al funcionamiento de las manufacturas locales. Dicha decisión se tradujo en el aliento a una nueva fase de sustitución de importaciones por medio de la producción de maquinarias e insumos industriales, sobre todo combustibles. Para encarar esta profundización de la industrialización y aliviar así el peso de las importaciones en el balance externo del país, el Estado no contaba empero con los recursos suficientes. El ajuste fiscal impuesto por la reciente emergencia había reducido los fondos disponibles para la inversión pública. Fue en este contexto que surgió el llamado a los capitales extranjeros. A principios de 1953 el Congreso aprobó una legislación más permisiva de radicación de capitales, y con sus auspicios se concretaron varios proyectos de inversión de firmas norteamericanas y europeas para la producción de tractores, camiones y automóviles.

La apertura hacia el capital extranjero, junto con la reorientación del IAPI a favor del campo, atrajeron hacia Perón las simpatías del mundo de los negocios, que vio en ellas una auspiciosa rectificación de la política de desarrollo. Paralela-

mente generaron un clima de inquietud entre muchos de los integrantes de su coalición de apoyo. El conflicto se hizo manifiesto con la iniciativa más audaz hacia el capital extranjero: la negociación de un contrato con la Standard Oil de California para explorar y explotar los yacimientos de petróleo del sur del país. La justificación oficial puso el acento en la creciente demanda de combustible y en la incapacidad de la empresa estatal YPF para afrontar las inversiones necesarias. Estas razones resultaron poco convincentes en el tratamiento del contrato por parte del Congreso. Allí había sido enviado para su ratificación por ley, ya que rozaba la cláusula nacionalista de la Constitución de 1949. La oposición radical, a través de Arturo Frondizi, impugnó el contrato con un discurso antiimperialista, denunciando la enajenación de la soberanía sobre los recursos nacionales. A la vez, el bloque oficialista mostró escaso entusiasmo en su defensa porque para una mayoría comportaba la traición al principio justicialista de la independencia económica. En definitiva, la ratificación legislativa del contrato fue postergada indefinidamente. Tampoco Perón insistió en la iniciativa, consciente quizá de que había franqueado el límite de la tolerancia ideológica de sus partidarios para con el nuevo rumbo económico.

En su segunda presidencia, Perón no solamente tropezó con la resistencia de ideas y creencias que él mismo contribuyera a arraigar; asimismo entró en colisión con intereses que eran centrales para su sustentación política. El tránsito desde una etapa distribucionista hacia otra que tenía por eje los problemas de la producción, anunciado en el Segundo Plan Quinquenal, incluyó también una campaña nacional por el aumento de la productividad. El objetivo era producir más para que hubiese más bienes a repartir. Con esta idea, durante 1953 los empresarios iniciaron una abierta ofensiva que abogó por la revisión de los convenios y la legislación laboral en nombre del mayor rendimiento de la fuerza de trabajo. Como indica Louise Doyon, se trataba, en verdad, de eliminar las normas que ponían límites a la autoridad patronal sobre las condiciones de trabajo y de recortar la injerencia de los delegados de personal en la vida interna de las empresas. A fines de 1954 el gobierno se hizo cargo de esas demandas y promovió un nuevo ejercicio de concertación social reuniendo a la CGT y a la

CGE en el Congreso Nacional de la Productividad. Durante las deliberaciones, que se extendieron hasta abril de 1955, la delegación sindical rechazó cada una de las concesiones que en materia de flexibilidad laboral reclamaban los empresarios. Bajo la presión del estado de movilización obrera puesto de manifiesto en las negociaciones colectivas de 1954, la CGT reafirmó que el conjunto de garantías y protecciones al trabajo constituía parte integral de la Revolución Justicialista y no era negociable. Al final, las conclusiones del congreso se caracterizaron por su ambigüedad e indefinición y dejaron pendiente el compromiso de modificar las cláusulas laborales así como la recuperación de las prerrogativas patronales en la dirección de las empresas.

El hecho a destacar es que Perón no apeló a su liderazgo político para forzar un desenlace más acorde con el nuevo rumbo económico. Como ocurriera en el debate sobre el petróleo, también ahora optó por acomodarse a las resistencias opuestas por su propio movimiento. Estos episodios indicaban que para avanzar en la agenda de la modernización económica era preciso emprender la compleja operación política de recomponer la coalición de gobierno. Éste era un desafío que Perón no estaba preparado para afrontar, sobre todo cuando a principios de 1955 se encontró envuelto en otro, más urgente, con las fuerzas de la oposición política.

Luego de la dura prueba de 1952 y del mejoramiento de la situación económica, el gobierno pudo afrontar las elecciones legislativas de 1954 con éxito, recibiendo el voto favorable de dos tercios del electorado. La solidez de las mayorías electorales del oficialismo, más su mejor imagen en los medios empresarios y la normalización de las relaciones con los Estados Unidos confirmaron a los sectores opositores en su alienación política: sólo cabía una esperanza a sus aspiraciones si desde adentro del propio régimen estallaba el conflicto. Y esto fue lo que ocurrió cuando Perón se enfrentó con la Iglesia ya que, al hacerlo, dividió sus apoyos en las Fuerzas Armadas y puso en marcha la conspiración militar. En noviembre de 1954, en una de sus intervenciones públicas, Perón acusó a "ciertos sacerdotes" de actividades antiperonistas, trayendo a primer plano un conflicto que había venido madurando en los años previos y cuya evolución es tratada por Lila Caimari en su capítulo.



*Perón con integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES),  
8 de marzo de 1955.*

El ejercicio crecientemente absolutista del poder por parte de Perón fue afectando con el tiempo y sin remedio sus relaciones con la Iglesia. Esto se hizo visible en el desplazamiento progresivo de la Iglesia de los ámbitos tradicionales de su acción pastoral, entre las mujeres, los niños, la juventud. Perón sumó a ello su propio comportamiento personal que, en forma desafiante a los usos y costumbres de un jefe de Estado, lo exhibía en los jardines de su residencia y en las calles céntricas de Buenos Aires rodeado por la alegre comitiva de las adolescentes de la UES. La afrenta mayor fue el intento de convertir al justicialismo ya no sólo en la doctrina oficial del Estado sino a la vez en la expresión del verdadero cristianismo. Desde las esferas oficiales comenzó a delinearse el mensaje de un “cristianismo peronista”, independizado de la tradición católica y con frecuencia incluso en contra de ella. El nuevo evange-

lio se asignó la misión de rescatar el mensaje social de Cristo del olvido al que lo confinara un clero dominado por preocupaciones mundanas y atento al cumplimiento formal de los preceptos religiosos. Esta prédica fue acompañada de consecuencias prácticas: los líderes peronistas se dedicaron a repartir por su cuenta las credenciales de buen o mal cristiano, los cultos no católicos disfrutaron de una sospechosa tolerancia, la devoción popular que rodeó a la figura de Evita después de su muerte fue transformada en una liturgia religiosa paralela.

Frente a la injerencia del régimen y sus ambiciones hegemónicas, la jerarquía eclesiástica reaccionó con cautelosa prudencia pero ésa no fue la actitud del mundo católico en general. Sus asociaciones de laicos devinieron cada vez más en refugios de una militante resistencia, canalizando las disidencias que los partidos mostraban no ser capaces de articular. La acusación de Perón en noviembre de 1954 fue el fruto de su irritación frente al espacio creciente que los adversarios del peronismo iban ganando en esos ámbitos sin que las autoridades de la Iglesia hicieran nada por evitarlo. El malestar se hizo más vivo al conocerse el proyecto de fundar un Partido Demócrata Cristiano. Luego de la intervención de Perón una sucesión de medidas suprimió de un plumazo los derechos y privilegios otorgados a la Iglesia. Se eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas y los subsidios a la enseñanza privada, se aprobó una ley de divorcio, se autorizó la reapertura de prostíbulos, se prohibieron las procesiones religiosas.

Las reformas legales fueron seguidas de una intensa campaña anticlerical orquestada por la prensa oficial. En los primeros meses de 1955 se anunció una futura reforma de la Constitución para decidir la separación entre la Iglesia y el Estado. Frente a estos ataques, inimaginables ocho años atrás cuando el catolicismo hizo suya la causa peronista, sus sectores militantes convirtieron los templos en tribunas de protesta política y moral y lanzaron una insidiosa campaña de panfletos que desafió los controles oficiales. Los grupos más diversos de la oposición política cerraron filas en torno de ellos, entreviendo en el distanciamiento entre el régimen y la opinión católica la ocasión para poner en marcha una ofensiva como la de 1945. El 8 de junio, desafiando las prohibiciones, se celebró una multitudinaria procesión de Corpus Christi, en la que católi-

cos, radicales, socialistas y comunistas marcharon en el centro de Buenos Aires al grito de ¡Viva Cristo Rey!

A la protesta civil le siguió el 16 de junio un atentado en gran escala contra la vida de Perón; la crónica de sus alternativas y desarrollo posterior se encuentra en la contribución de Robert Potash en este libro. Un sector de la Marina y la Fuerza Aérea se alzó en rebeldía, bombardeando y ametrallando la Casa de Gobierno y sus alrededores. Advertido a tiempo, Perón encontró un refugio seguro y salió ileso. Los grupos de trabajadores que acudieron a la Plaza de Mayo para apoyar a su líder y los transeúntes que se encontraban allí no tuvieron la misma suerte; entre ellos se contaron unos 300 muertos y 600 heridos. Esa noche, sofocado el movimiento insurgente, ardieron las principales iglesias del centro de la ciudad, luego de ser saqueadas por fuerzas de choque peronistas, exhibiendo sin atenuantes la extrema radicalización del conflicto. Al estupor provocado por estos hechos de violencia inéditos en la historia reciente se sumó la alarma entre los jefes militares que permanecían leales debido a la intervención de la CGT, que distribuyó armas entre los obreros. Aconsejado por los altos mandos del Ejército, Perón lanzó una política de conciliación. El estado de sitio fue levantado, cesaron los ataques a la Iglesia y se sustituyeron las figuras del gabinete asociadas a ellos, los dirigentes de la oposición fueron invitados a discutir una tregua. A sus seguidores, Perón declaró: "La revolución peronista ha terminado. Comienza una nueva etapa que es de carácter constitucional. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios".

Este llamado a la pacificación no tuvo, empero, el eco esperado. De hecho dio renovados bríos a la oposición, la cual desde las radios, adonde accedió por primera vez en diez años, reclamó el fin de la estructura represiva y formuló programas de gobierno alternativos. El fracaso de la tregua llevó a Perón a dar un nuevo golpe de timón. El 31 de agosto, en una carta dirigida al Partido Peronista y la CGT, comunicó su decisión de abandonar el gobierno para garantizar el éxito de la pacificación. Como era previsible, la central sindical organizó una gran demostración de apoyo y la Plaza de Mayo asistió a una nueva edición del 17 de octubre de 1945. Siguiendo el libreto

---

## “La revolución peronista ha terminado”

*“Para lograr nuestros tres grandes objetivos, la independencia económica, la reforma constitucional y la reforma cultural, hemos debido indudablemente recurrir en muchas circunstancias a ciertas restricciones que nosotros no negamos. Con una absoluta licencia para que todo el mundo hiciera lo que quisiese, nosotros no hubiéramos podido cumplir nuestro objetivo, y como dije los objetivos son irrenunciables. En cambio, los medios de acción eran libres. Recurrimos por lo tanto a esos medios de acción, limitamos las libertades en cuanto fue indispensable limitarlas para la realización de nuestros objetivos. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades: lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la manera indispensable y no más allá de ello. [...] Por eso, terminado ese periodo en que hemos afirmado nuestros objetivos fundamentales en la acción social, ya en amplia medida, lo que queda por hacer será obra de la legislación empíricamente paulatina y del propio desenvolvimiento del país. [...] La revolución peronista ha finalizado, comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios.”*

Palabras de Perón en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno frente a legisladores peronistas de ambas Cámaras del Congreso, 15 de julio de 1955.

---

preparado, Perón comunicó a la muchedumbre que retiraba su renuncia y pronunció el discurso más violento de toda su carrera política. Comenzó diciendo que había ofrecido la paz a sus adversarios pero que éstos no la querían, y concluyó afirmando: “A la violencia le hemos de responder con una violencia mayor; cuando uno de los nuestros caiga caerán cinco de ellos. Hoy comienza para todos nosotros una vigilia en armas”.

Esta inesperada declaración de guerra no tuvo consecuencias entre sus partidarios, pero terminó por convencer a muchos militares todavía indecisos sobre qué hacer. El 16 de septiembre se produjo finalmente el alzamiento militar. Luego de cinco días, durante los cuales las fuerzas leales a Perón, superiores en número, no mostraron voluntad de luchar, las tropas

rebeldes se impusieron. Perón, entre tanto, buscó asilo en la embajada de Paraguay, dando comienzo a un largo exilio. El 23 de septiembre, mientras la CGT reclamaba a los trabajadores conservar la calma, otra multitud llenó la Plaza de Mayo, ahora para aclamar al nuevo presidente, el general Eduardo Lonardi, y celebrar el fin de la década peronista.

En el futuro, peronistas y antiperonistas prolongarían sus conflictos, confrontándose en torno de versiones opuestas de la experiencia histórica que acababa de concluir. Para los partidarios de Perón, durante el período 1945-1955 los trabajadores alcanzaron una participación en el ingreso nacional nunca igualada, y la obra de una legislación social generosa y un amplio reconocimiento político hizo que abandonaran su condición de ciudadanos de segunda clase para convertirse en miembros plenos de la comunidad política. Para los adversarios de Perón, los años peronistas fueron aquellos en los que tuvo lugar, en una medida hasta allí desconocida, el cercenamiento de las libertades públicas y del pluralismo político por



*La Plaza de Mayo luego del bombardeo de junio de 1955.*

la acción de un liderazgo y un movimiento que se concibieron a sí mismos como la encarnación de la voluntad nacional. Como era de esperar éste fue un diálogo de sordos. Los argumentos de una y otra de las dos configuraciones sociopolíticas en las que se dividió el país colocaron el énfasis en aspectos distintos de la compleja realidad histórica. La disociación entre los valores de la justicia social y los ideales de la democracia política abierta en las elecciones de 1946 mantuvo, así, toda su vigencia.

Los efectos de este contrapunto de interpretaciones sobre la convivencia entre los argentinos fueron potenciados porque, una vez llegados a su fin, los años peronistas no entraron en la historia llevándose consigo sus proyectos fallidos, la carga de



los conflictos que habían desatado. Ésa fue la ilusión de los vencedores de 1955 que presidió la tarea de desperonización del país a la que se lanzaron, aplicando el mismo espíritu excluyente, los mismos instrumentos coercitivos que combatieron hasta entonces. Ésa fue una ilusión fugaz. Al poco tiempo se vieron confrontados con el legado último de los años peronistas: una fuerza social y política sólidamente arraigada en el tejido social e institucional. Este había sido el desenlace de la empresa original de Perón, conjurar el peligro del comunismo actuando sobre las condiciones de postergación social y alienación política en el mundo del trabajo que eran propicias para su penetración. Vista en perspectiva, ésa fue una empresa exi-

*Perón asciende a la nave paraguaya que lo lleva al exilio.*

tosa. En América Latina, la Argentina estará entre los países donde las corrientes ideológicas de izquierda perdieron gravitación social, quedando confinadas a una influencia en los círculos intelectuales y los medios universitarios.

Aprovechando las oportunidades que ofreció el breve ciclo de prosperidad de la posguerra, Perón puso al alcance de los trabajadores niveles de vida y de expectativas sociales que hicieron de ellos componentes principales de la sociedad y la economía que crecieron sobre esos cimientos. Esa experiencia de ascenso social y el papel protagónico que alcanzaron a través de sus organizaciones sindicales hizo surgir en los trabajadores una capacidad de intervención política y social que adquirió vida propia, aun después que comenzaron a debilitarse las circunstancias extraordinarias que la habían hecho posible. Perón mismo habría de experimentar los límites que esa capacidad de intervención imponía cuando hacia el final de su gestión intentó la búsqueda de alternativas al rumbo original de la economía peronista. Para los que lo derrocaron en 1955, esos límites serían más duros y difíciles de franquear porque hicieron sentir su influencia en el marco del conflicto de legitimidad que rodeó la obra de los años peronistas.

# BIBLIOGRAFÍA

- Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia católica*, Ariel-Historia, Buenos Aires, 1995.
- Ciria, Alberto: *Política y cultura popular: la Argentina peronista 1946-1955*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1983.
- Crespo, Jorge: *El coronel Perón*, Ayer y Hoy Ediciones, Buenos Aires, 1998.
- Gambini, Hugo: *Historia del peronismo*. Vol. 1, 1999, vol. 2, 2001, Planeta, Buenos Aires.
- García, Marcela Alejandra: *La oposición política al peronismo. Los partidos políticos en la Argentina entre 1943 y 1951*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997.
- Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Ariel, Buenos Aires, 1998.
- Godio, Julio: *La caída de Perón*, Granica Editor, Buenos Aires, 1973.
- Halperín Donghi, Tulio: *Argentina en el callejón*, Ariel, Buenos Aires, 1995.
- : *Argentina: La democracia de masas*, Paidós, Buenos Aires, 1983.
- Luna, Félix: *El 45. Crónica de un año decisivo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.
- : *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.
- Mackinnon, María Moira: *Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950)*, Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1999.
- Manson, Enrique: *Argentina en el mundo del siglo XX*, Ediciones Caligraf, Buenos Aires, 2000.
- Mora y Araujo, Manuel e Ignacio Llorente (eds.): *El voto peronista: ensayos de sociología electoral argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1980.
- Navarro, Marysa: *Evita*, Corregidor, Buenos Aires, 1981.
- Page, Joseph: *Perón. Una biografía*, Grijalbo, Buenos Aires, 1999.
- Pavón Pereira, Enrique: *Perón. Preparación de una vida para el mando (1895-1942)*, Ediciones Espiño, Buenos Aires, 1953.

Potash, Robert: *El Ejército y la política en la Argentina*, vol. 2, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

Romero, Luis Alberto: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, FCE, Buenos Aires, 1994.

Rouquié, Alain: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1982.

Torre, Juan Carlos (ed.): *La formación del sindicalismo peronista*, Legasa, Buenos Aires, 1988.

Torre, Juan Carlos: *La vieja guardia sindical y Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.

Waldman, Peter: *El peronismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

Zanatta, Loris: *Perón y el mito de la nación católica*, Sudamericana, Buenos Aires, 1999.